

La doctrina de las “manos limpias” (*clean hands*):
entre consagraciones fallidas y escenarios de
desjudicialización en el orden jurídico internacional

*The doctrine of “clean hands”: between failed
consecrations and scenarios of dejudicialization
in the international legal order*

*La doctrine des “mains propres” (clean hands): entre
consécérations ratées et scénarios de déjudiciarisation
dans l’ordre juridique international*

Harold Bertot Triana¹

 <https://orcid.org/0000-0003-0737-4710>

Universidad Internacional de la Empresa. España

Correo electrónico: harold.bertot@universidadunie.com

Recepción: 1o. de agosto de 2024

Aceptación: 5 de marzo de 2025

Publicación: 27 de mayo de 2025

DOI: <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2025.25.19401>

Resumen: El artículo analiza la doctrina de las “manos limpias” en el derecho internacional y su impacto en el campo de las objeciones procesales. La ubicación de esta doctrina en las fuentes de derecho, y en especial como principio general del derecho del artículo 38 del Estatuto de la

¹ Profesor de Derecho Internacional Público. Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). Director del Grado de Relaciones Internacionales (acreditado contratado doctor). Este trabajo se ha realizado como miembro del grupo de trabajo del proyecto “Vacíos normativos y desarrollo progresivo de la Agenda 2030 y del principio de sostenibilidad. Especial relevancia para España” (PID 2022-13833390B-100) y como parte de la estancia de investigación en el

CIJ, se discute en este trabajo. Es un aspecto relacionado con los contextos normativos y conceptuales de esta institución, y su relación con otros principios y máximas derivadas del principio de equidad y de buena fe. De modo enfático, se argumenta el impacto de la operatividad de esta doctrina en la estructuración e institucionalización de la sociedad internacional, cuando podría impedir la jurisdicción de un tribunal internacional o la admisibilidad de una reclamación internacional para resolver una disputa en las relaciones interestatales.

Palabras clave: doctrina de las “manos limpias”; principio de equidad y de buena fe; principio general del derecho; objeciones procesales; estructuración e institucionalización de la sociedad internacional.

Abstract: The article analyzes the clean hands doctrine in international law and its impact in the field of procedural objections. The location of this doctrine in the sources of law, and especially as a general principle of law in article 38 of the ICJ Statute, is discussed in this paper. It is an aspect related to the normative and conceptual contexts of this institution, and its relationship with other principles and maxims derived from the principle of equity and good faith. In an emphatic way, the impact of the operation of this doctrine on the structuring and institutionalization of international society is argued, when it could prevent the jurisdiction of an international court or the admissibility of an international claim to resolve a dispute in interstate relations.

Keywords: clean hands doctrine; principle of equity and good faith; general principle of law; procedural objections; structuring and institutionalization of international society.

Résumé: L'article analyse la doctrine des mains propres en droit international et son impact dans le domaine des objections procédurales. La place de cette doctrine dans les sources du droit, et en particulier en tant que principe général du droit dans l'article 38 du Statut de la CIJ, est discutée dans cet article. C'est un aspect lié aux contextes normatifs et conceptuels de cette institution et à sa relation avec d'autres principes et maximes dérivés du principe d'équité et de bonne foi. De manière emphatique, l'impact du fonctionnement de cette doctrine sur la structuration et l'institutionnalisation de la société internationale est argumenté, lorsqu'elle pourrait empêcher la compétence d'une juridiction internationale ou la recevabilité d'une réclamation internationale pour résoudre un différend dans les relations interétatiques.

Mots-clés: doctrine des mains propres; principe d'équité et de bonne foi; principe général du droit; objections procédurales; structuration et institutionnalisation de la société internationale.

Sumario: I. Introducción. II. El lugar de la “doctrina de las manos limpias” en el derecho internacional. III. Una doctrina de muchas “manos limpias”: sus múltiples expresiones en la jurisprudencia internacional. IV. ¿Cuestión de admisibilidad o de fondo en el contencioso interestatal ante la Corte Internacional de Justicia? La aplicación de la “doctrina de las manos limpias” y la institucionalización del orden jurídico internacional. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

Centre de Droit International de Nanterre (CEDIN) de la Université Paris Nanterre, Francia, en marzo y abril de 2024.

I. Introducción

“He who comes into equity must come with clean hands”, es un *principio de equidad* que está en la base de la teoría o doctrina de “manos limpias”.² Otros principios o máximas derivadas de este principio —de equidad o de buena fe— se asumen relacionados estrechamente o como expresión de esta doctrina: *nullus commodum capere de sua injuria propria* (“no se puede permitir que nadie se aproveche de su propio mal”) y *ex delicto non oritur actio* (“un acto ilegal no puede servir de base para una acción”).³ Esto tiene especial consideración en el derecho internacional, en particular, en dos ámbitos fundamentales donde más se ha invocado, debatido y aplicado: la admisibilidad de las reclamaciones sobre *protección diplomática*, y en las *objeciones procesales* para impedir la defensa o admisibilidad de una demanda en un tribunal internacional.

En el primero de los casos, la aplicación de la doctrina de “manos limpias” ha tenido siempre una amplia discusión.⁴ Una base jurisprudencial para defender su existencia se buscó en una práctica que se remonta al siglo XIX.⁵ En este tipo de casos, la admisibilidad de las demandas por los árbitros internacionales tenía causa en una violación de derecho internacional por el individuo, sin la existencia de comportamientos ilícitos del Estado demandado.⁶ Pero cuan-

² Esta máxima se ha reconocido en la doctrina y en numerosos arbitrajes internacionales. En *Opinion of the Umpire en Friedrich and Company Case* de la Comisión Franco-venezolana, se reconoció que: “Here may be applied with a certain degree of propriety one of the most important maxims of equity, viz, «He who comes into equity must come with clean hands»”. “Friedrich and Co. Case”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. X, United Nations, 31 de julio de 1905, p. 54.

³ Véase, por ejemplo, sobre este particular, *Islamic Republic of Iran v. United States of America*, Preliminary Objections submitted by The United States of America, 1 de mayo de 2017, párr. 6.30 y ss.

⁴ En la doctrina española, véase el reciente estudio de Petit-De-Gabriel, Eulalia-W., “«Clean Hands Revisited». El eterno retorno de una doctrina discutible”, *Anuario español de derecho internacional*, vol. 39, 2023, pp. 341-405.

⁵ Véase Crawford, James, “Second report on State responsibility”, *Special Rapporteur*, Document A/CN.4/498 and Add. 1-4, 17 de marzo, 1 y de 30 abril, 19 de julio de 1999, párr. 334, p. 83; Salmon, Jean, “Des mains propres comme conditions de recevabilité des réclamations internationales”, *Annuaire français du droit international*, vol. 10, 1964, pp. 225-266.

⁶ Véase, de modo especial a Salmon, quien en efecto se refirió a que: “Il apparaît en tout cas que ces espèces se caractérisent toutes par le fait que la violation du droit international par la victime fut la cause unique du dommage dont elle se plaignait, que la relation de cause à effet

do existían conductas ilícitas por el Estado demandado, se concluía que no se inadmitió ninguna reclamación.⁷ Esta realidad obedece a que la eventual invocación de “manos limpias” sólo puede operar en aquellos casos donde se internacionaliza la cuestión; es decir, cuando existe una violación de derecho internacional por el Estado demandado con respecto a la persona, y cuando la conducta ilícita previa es imputable al Estado demandante de la protección. De modo que no cabe invocar “manos limpias” si el comportamiento ilícito previo es de la persona, pues deben ser actos ilícitos del Estado demandante con respecto al derecho internacional.⁸ No obstante, se ha remarcado que no debe descartarse el comportamiento del individuo como aportación a esta violación del derecho internacional.⁹

En su momento, James Crawford, como relator especial sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, se refirió a la dificultad de la doctrina de “manos limpias” para ser reconocida en los marcos de la protección diplomática.¹⁰ John Dugard fue del criterio de no incluir una referencia a esta doctrina en el proyecto de artículos sobre protección diplo-

entre le dommage et la conduite de la victime était pure, sans intervention d'acte illicite de la part de l'Etat défendeur”. Salmon, Jean, *op. cit.*, p. 259.

⁷ Crawford, James, “Second report on State responsibility”, *cit.*, párr. 335, p. 90; Salmon, Jean, *op. cit.*, p. 259.

⁸ Cfr. Dugard, John, “Sixth report on diplomatic protection”, Special Rapporteur, Document A/CN.4/546, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, 2005, párr. 8, p. 4.

⁹ En este sentido sostuvo Alain Pellet en las discusiones de este tema en la CDI: “For example, in the *LaGrand* case, if the individual concerned had refused any form of communication with the United States judicial authorities, or had concealed his German nationality from them, the question would have arisen whether the requirement of clean hands would be grounds for inadmissibility of a claim to exercise diplomatic protection by Germany, not with respect to the murder committed by that individual, which was completely unrelated to the alleged internationally wrongful act, but with respect to the refusal to communicate with the judicial authorities or the concealment of his German nationality, since the individual would, through his unclean hands, have put himself in a position in which he was not entitled to the protection afforded by the 1963 Vienna Convention”. “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005, p. 100, párr. 24.

¹⁰ Sostuvo J. Crawford: “Even within the context of diplomatic protection, the authority supporting the existence of a doctrine of «clean hands», whether as a ground of admissibility or otherwise, is, in Salmon’s words, «fairly long-standing and divided». It deals largely with individuals involved in slave-trading and breach of neutrality, and in particular a series of decisions of the United States-Great Britain Mixed Commission set up under a Convention of 8 February

mática del que era relator especial.¹¹ Esta posición fue apoyada por el resto de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional (CDI),¹² incluso por aquellos que habían mantenido una posición distinta.¹³ Escaso material jurisprudencial, doctrina movida entre la indiferencia o su rechazo,¹⁴ fueron los factores principales para considerar su no consagración en materia de protección diplomática. Con razón, en su momento un miembro de la CDI en las discusiones sobre esta figura consideró que su posible inclusión estaría en los marcos del *desarrollo progresivo*, antes que como “codificación del derecho internacional” por la CDI.¹⁵

El segundo aspecto, las objeciones procesales, es el que concentra las siguientes líneas de este trabajo. Existen grandes interrogantes sobre su viabilidad en derecho internacional, que se manifiestan tanto en las relaciones interestatales como en otros ámbitos jurisdiccionales internacionales. Pronunciamientos recientes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) toman partido sobre su reconocimiento —o no— en contenciosos ante su jurisdicción. En un primer momento, se analizará en este trabajo las dificultades

1853 for the settlement of shipowners’ compensation claims”. Crawford, James, “Second report on State responsibility”, *cit.*, p. 83.

¹¹ Dugard, John, “Sixth report on diplomatic protection”, *cit.*, párr. 18, p. 6; “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *cit.*, párr. 19, p. 99.

¹² Véase “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005, pp. 99 y ss.

¹³ Véase, en este sentido, la posición mantenida por el Alain Pellet: “Having read the Special Rapporteur’s sixth report, he was ready to concede that he had been wrong in thinking that clean hands might constitute a requirement for the exercise of diplomatic protection”. *Idem*.

¹⁴ Aunque reconoce que se discute como causa de admisibilidad, Díez de Velasco, estuvo de acuerdo en sostener que “[...] en tout cas, elle peut avoir incidence sur le fond du droit —le particulier ne doit pas avoir agi irrégulièrement suivant les dispositions du droit interne de l’Etat ou du droit international (doctrine des *clean hands*)”. Díez de Velasco, Manuel, “La protection diplomatique des sociétés et des actionnaires”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, 1974, vol. 141, p. 103. En el sentido de negar su existencia en el derecho internacional, véase a: Remiro Brotons, R. *et al.*, *Derecho internacional. Curso general*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 476; Díaz Barrado, Cástor Miguel, “La protección diplomática en el derecho internacional contemporáneo: cuestiones generales”, *Anuario de Derecho de Diplomático y Consular*, núm. 1, 2016, p. 177; Visscher, Paul De, “Cours général de droit international public”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, vol. 136, 1972, pp. 176 y 177.

¹⁵ Así lo consideró Pellet. Véase “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005, párr. 26, p. 100.

de esta “doctrina” en el derecho internacional, para encontrar su colocación como un principio general del derecho del artículo 38 del Estatuto de la CIJ. Este aspecto está conectado con el hecho de ser una institución difusa y relacionada con máximas y principios con las que tiende a confundirse. Enseguida, se exponen las diferentes expresiones que ha tenido esta doctrina o teoría en la jurisprudencia internacional. Por último, se analiza su impacto en cuestiones de admisibilidad, o bien, para rechazar reclamaciones en etapas de fondo en contenciosos interestatales ante la CIJ. Este análisis concluye con una reflexión sobre el impacto que tendría su viabilidad en la estructuración e “institucionalización de la sociedad internacional”, tomando como base el “principio de solución pacíficas de controversias” y la extensión de los ámbitos jurisdiccionales internacionales.

II. El lugar de la “doctrina de las manos limpias” en el derecho internacional

La “teoría” o “doctrina” de las “manos limpias”, de difícil encuadre en los términos exactos de una doctrina o teoría —como se deducirá en lo adelante—, es en extremo ambigua, de difusos contornos en su definición.¹⁶ Como ya se ha hecho mención, se constituye por una amalgama de principios y máximas latinas con base en el principio de la buena fe y la equidad. Está marcada en su contenido por la generalidad y la abstracción, lo que permite su invocación en una amplia variedad de situaciones. P. Reuter reconoció en *Barcelona Traction* que con esta denominación de “manos limpias” se encontraba “une substance assez riche, mais un peu hétérogène et désordonnée”.¹⁷ No

¹⁶ Este hecho se ha resaltado en *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*: “No generally accepted definition of the clean hands doctrine has been elaborated in international law”. *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, Award of the Arbitral Tribunal, PCA Case No. 2004-04, 17 September, 2007, párr. 418. I. Brownlie expresó en las discusiones de la CDI en materia de protección diplomática: “The key question turned on the precise definition of the clean hands doctrine because in reality the same term covered several different legal positions, which did not make the task any easier”. “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005, p. 108.

¹⁷ En este punto, señaló: “On rassemble sous une image évocatrice mais inutilement désobligeante, des éléments complexes un peu confus et peut-être disparates; la théorie des *clean hands*

faltó razón tampoco en su momento, cuando se sostuvo que no constituía una *institución jurídica autónoma*,¹⁸ y es evidente que, en su estado actual, el derecho internacional no permite sostener lo contrario.

La doctrina o teoría de las “manos limpias” tiene una indudable impronta del sistema jurídico del *common law*.¹⁹ Esta pretendida incorporación de instituciones o doctrinas del derecho inglés al derecho internacional tiene el inconveniente de trasladar a este orden jurídico toda una gama de principios o máximas de equidad o de buena fe, con una notable carga de abstracción, que no pocos problemas generan para su aceptación o aplicación. Es de notar que estas máximas o principios se intentan presentar, a su vez, con cierta autonomía cada uno de ellos. Sin embargo, la amplitud conceptual de cada uno parece hacerlos indistinguibles y no se explica de modo unívoco en la doctrina: algunos supuestos se exponen como aplicación del principio de *ex*

reste à faire. On peut se demander d’ailleurs si on pourrait faire entrer dans un système unique tous les cas et toutes les hypothèses que la doctrine et la pratique rangent sous ce titre”. *Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (New Application: 1962) (Belgium v. Spain)*, repique de M. Reuter, oral proceedings, (preliminary objections) (conclusion), 1962, pp. 680 y 681.

¹⁸ En *Oil Platforms*, Irán sostuvo en su contramemoria que “the concept of «clean hands», while reflecting and incorporating fundamental principles of law inspired by good faith, is not an autonomous legal institution” y que era necesario “the operation of other institutions or legal rules for its implementation”. *Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, reply and defence to counter-claim submitted by the Islamic Republic of Iran, vol. 1, 10 March 1999, p. 176.

¹⁹ “The principle of clean hands is known as part of equity in common law countries”. *Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (“Bapex”) and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (“Petrobangla”)*, ICSID Case No. ARB/10/18, Decision on Jurisdiction, 19 August, 2013, párr. 477; *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40, Award, 6 December 2016, párr. 493: “The common law doctrine of unclean hands barring claims based on illegal conduct has also found expression at the international level, although its status and exact contours are subject to debate and have been approached differently by international tribunals”. H. Rolin consideró: “Sauf erreur de ma part, la doctrine des clean hands n’est connue en droit interne que dans les pays anglo-saxons: elle ne peut en tout cas être érigée comme faisant partie de ces principes généraux de droit communs à tous les Etats civilisés”. Rolin, Plaidoirie de M., *Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium v. Spain)*, Volume II Oral Proceedings (Preliminary Objections), 1962, p. 336. Wortley, B. A., “The general principles of private international law from the English standpoint”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, vol. 71, 1947, p. 60.

delicto non oritur actio, y en otros se colocan en los marcos del *nullus commodum capere de sua injuria propria*.²⁰ A su vez, se han identificado expresiones de esta doctrina en situaciones, como se verá más adelante, que impiden asumir la existencia de una institución delimitada conceptual y normativamente.

Esto resulta en extremo problemático cuando pretende encontrar acomodo en las fuentes de derecho de este ordenamiento jurídico. Con bastante frecuencia, los principios generales del artículo 38 del Estatuto de la CIJ son la cobertura para identificar en los distintos sistemas jurídicos del mundo, principios o máximas de equidad o de buena fe, ya sea porque coinciden en su enunciado general o expresan una idea similar en sus derivaciones. En las líneas que siguen, se intentará demostrar que esta “doctrina” no puede ser considerada como principio general del derecho, en una discusión que se ha abordado con mayor riqueza en el arbitraje de inversiones.

En los casos que han debatido con más extensión este tema, el tribunal ha concluido en su no reconocimiento como principio general de derecho. En *Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation*, se exponía:

The Tribunal is not persuaded that there exists a “general principle of law recognized by civilized nations” within the meaning of Article 38(1)(c) of the ICJ Statute that would bar an investor from making a claim before an arbitral tribunal under an investment treaty because it has so-called “unclean hands”.²¹

General principles of law require a certain level of recognition and consensus. However, on the basis of the cases cited by the Parties, the Tribunal has formed the view that there is a significant amount of controversy as to the “existence of an unclean hands” principle in international law.²²

En *South American Silver Limited v. The Plurinational State of Bolivia*, por su parte, el tribunal también rebatió la consideración de principio general del derecho del artículo 38 del Estatuto, ante esta alegación por parte de Bolivia.²³ Negó incluso que se hubiera aplicado en casos que la academia defendió

²⁰ Cheng, Bin, *General of principles law as applied by international courts and tribunals*, London Stevens and Sons Limited, 1953, pp.149-158; Fitzmaurice, Gerald, “The general principles of international law considered from the standpoint of the rule of law”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye*, vol. 92, 1957, pp. 117-119.

²¹ *Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation*, UNCITRAL, PCA Case No. 2005-03/AA226, párr. 1358.

²² *Ibidem*, párr. 1360.

²³ *South American Silver Limited v. The Plurinational State of Bolivia*, PCA Case No. 2013-15,

como aplicación de esta doctrina.²⁴ En un sentido contrario, en *Littop Enterprises Limited*, y con expresa referencia a *Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela* —el cual había sostenido que “es indiscutible que una demandante con las ‘manos sucias’ carece de legitimación en un arbitraje en materia de inversiones”—²⁵ asume que la doctrina de las manos se reconocía como un *principle of general international law*, que para algún autor en realidad hacía referencia a un principio general del derecho del artículo 38 del Estatuto:²⁶

Award, November 22, 2018, párr. 445. El tribunal sostuvo, en primer lugar, que “Bolivia did not submit sufficient evidence to establish that the clean hands doctrine enjoys the required recognition and consensus among the States to reach the status that Bolivia attributes to it”. *Ibidem*, párr. 445. Con respecto al argumento de que “the clean hands doctrine is widely recognized in civil law and common law systems”, a partir de decisiones de la Cámara de los Lores británica y la Corte de Casación francesa, y de referencias académicas sobre su existencia en Estados Unidos y Alemania, el tribunal sostuvo que “these are insufficient and not determinative regarding the alleged status of the clean hands doctrine as a general principle of international law under the terms of article 38(1)(c) of the ICJ Statute”. *Ibidem*, párr. 446. En este sentido, tampoco apoyó que las opiniones de jueces del entonces Tribunal Permanente de Justicia y de la CIJ, “reflect the majority position of the respective courts in connection with the application of the clean hands doctrine”. *Ibidem*, párr. 447.

²⁴ *South American Silver Limited v. The Plurinational State of Bolivia*, cit., párr. 448. La única posible excepción, el caso *Hesham T. M. Al Warraq v. Republic of Indonesia*, también descartado: “The only exception would seem to be the Al-Warraq case where the tribunal majority considered that the clean hands doctrine made the claimant’s claims inadmissible. However, in the dispositive of its decision, the tribunal referred expressly to Article 9 of the OIC Agreement as the basis to conclude that the claimant was not entitled to any damages in respect of the breaches of the fair and equitable treatment standard, and not that its claims were inadmissible due to the clean hands doctrine. Therefore, the Al-Warraq tribunal’s decision also fails to prove the acceptance and application of the above-mentioned principle under international investments law”. *Ibidem*, párr. 449. Los casos invocados fueron los siguientes: *Inceysa Vallisoletana S.L. v. The Republic of El Salvador*, ICSID Case No. ARB/03/26, Award, 2006; *World Duty Free Company Limited v. The Republic of Kenya*, ICSID Case No. ARB/00/7, Award, October 4, 2006; *Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria*, ICSID Case No. ARB/03/24, Award, August 27, 2008; *Hesham Talaat M. Al-Warraq v. The Republic of Indonesia*, UNCITRAL Case, Award, December 15, 2014; *Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines*, ICSID Case No. ARB/11/12, Award, December 10, 2014; *Gustav FW Hamster GmbH and Co KG v. Republic of Ghana*, ICSID Case No. ARB/07/24, Award, June 18, 2010; *Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic*, ICSID Case No. ARB/06/5, Award, April 15, 2009.

²⁵ *Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5, Award, 22 August 2016, párr. 492.

²⁶ Dumberry, Patrick, “New developments in the interpretation and application of the clean

In several cases tribunals have made clear that a party cannot come to investment arbitration with unclean hands. This has now been recognised in cases where there has been some illegality underlying the contract or the rights which a party is seeking to enforce. The doctrine has been recognised as a principle of general international law by arbitral tribunals and a number of academic authorities.²⁷

En sentido similar, se ha reconocido que ha tenido aplicación en este régimen del derecho internacional cuando se han desestimado demandas por falta de jurisdicción o por ser inadmisibles.²⁸ Esto ha sido en situaciones donde los tribunales han rechazado demandas precedidas por conductas injustas o ilegales o por comportamientos del inversionista de mala fe, de corrupción, de fraude o de engaño.²⁹ Por otro lado, ya hemos hecho mención que, en un reciente arbitraje, *South American Silver Limited v. The Plurinational State of Bolivia*, el tribunal consideró que en varios de estos no se aplicaba en realidad

hands doctrine by investment tribunals”, *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 14, núm. 4, 2023, p. 508; *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Separate opinion of Judge Iwasawa, Judgment of 31 January 2024, párr. 5.

²⁷ *Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v Ukraine*, SCC Case No V 2015/ 092, Final Award, 4 February 2021, párr. 439.

²⁸ Véase, *Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (“Bapex”) and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (“Petrobangla”)*, ICSID Case No. ARB/10/18, Decision on Jurisdiction, 19 August, 2013, párr. 482. Véase, por ejemplo, en *Hesham T. M. Al Warraq v. Republic of Indonesia*, al considerar que el demandante había incumplido las leyes y reglamento de Indonesia, y que tuvo un comportamiento perjudicial para el interés público (lo que constituía una violación del artículo 9o. de un *Acuerdo sobre Promoción, Protección y Garantía de Inversiones entre los Estados Miembros de la Organización de la Conferencia Islámica*), se apoyó en la doctrina de las “manos limpias” para impedir que prosiguiera en su demanda por trato justo y equitativo. *Hesham Talaat M. Al Warraq v. The Republic of Indonesia*, UNCITRAL Case, Award, December 15, 2014, párrs. 647 y 648. En *World Duty Free Company v. Republic of Kenya*, por su parte, el tribunal sostuvo: “In conclusion, as regards public policy both under English law and Kenyan law (being materially identical) and on the specific facts of this case, the Tribunal concludes that the Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded claims in these proceedings on the ground of *ex turpi causa non oritur actio*. These claims all sound or depend upon the Agreement of 27 April 1989 (as amended); and no other claim is pleaded, including any non-contractual proprietary or restitutionary claim”. *World Duty Free Company Limited v. The Republic of Kenya*, ICSID Case No. ARB/00/7, Award, October 4, 2006, párr. 179.

²⁹ *South American Silver Limited v. The Plurinational State of Bolivia*, cit., párr. 349.

esta teoría o doctrina y que tampoco se consideraba principio general del derecho.³⁰

Esta diferencia de criterios en el arbitraje de inversiones corre a la par de diferentes posiciones en la doctrina.³¹ El debate muchas veces se plantea después de un examen de los distintos sistemas jurídicos para determinar si supera el *test* de su reconocimiento en los principales sistemas jurídicos del mundo. Y aunque es evidente que este es el camino lógico que indica el artículo 38 del Estatuto, para el cual no es necesario advertir una identidad de los conceptos de derecho interno en el derecho internacional,³² en verdad el principal escollo para su consolidación como principio general del derecho

³⁰ *Ibidem*, párrs. 448 y 449.

³¹ Véase, en general, sobre esta controversia en: Kolb, Robert, *Good faith in international law*, Oxford; Portland, Hart Publishing, 2017, pp. 190-193; Borchard, Edwin M., *The diplomatic protection of citizens abroad or the law international claims*, New York, The Banks Law Publishing, 1927, p. 713; Dumberry, Patrick, “The clean hands doctrine as a general principle of international law”, *Journal of World Investment and Trade*, vol. 21, 2020, pp. 489-527; Pomson, Ori, “The clean hands doctrine in the Yukos Awards: a response to Patrick”, *Journal of World Investment and Trade*, vol. 18, núm. 4, 2017, pp. 712-734; Shapovalov, Aleksandr, “Should a requirement of clean hands be a prerequisite to the exercise of diplomatic protection - human rights implications of the international law commission’s debate”, *American University International Law Review*, vol. 20, núm. 4, 2005, pp. 829-866; Alba, Mariano de, “Drawing the line: addressing allegations of unclean hands in investment arbitration”, *Brazilian Journal of International Law*, vol. 12, núm. 1, 2015, pp. 322-338; Kaldunski, Marcin, “Principle of clean hands and protection of human rights in international investment arbitration”, *Polish Review of International and European Law*, vol. 4, núm. 2, 2015, pp. 69-102; Liew, Dominic Jr., “Finding clarity amidst confusion: cleaning up the clean hands doctrine in international investment law”, *Singapore Academy of Law Journal*, vol. 32, núm. 2, 2020, pp. 643-683; Llamzon, Aloysius, “Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation the State of the «Unclean Hands» doctrine in international investment law: Yukos as both omega and alpha”, *ICSID Review*, vol. 30, núm. 2, 2015, pp. 315-325; García Arias, L., “La doctrine des «clean hands» en droit international public”, *Annuaire de l’Association des auditeurs et des anciens auditeurs de l’Académie de droit international*, vol. 30, 1960, pp. 14-22.

³² La doctrina y la jurisprudencia convergen en este sentido. Cfr. Gaja, G., “General principles of law”, *Max Planck Encyclopedias of International Law*. <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1410>; Crawford, James, *Brownlie’s principles of public international law*, 9a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 32. Véase, en este sentido, lo considerado en *Argentine-Chile Frontier Case*, en el que se expone que “it is also clear that these terms are not to be understood in quite the same sense as they are in municipal law”. “Argentine-Chile Frontier Case”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XVI, 24 November, 1966, p. 164. Véase también en este sentido: “Separate Opinion by Sir Arnold McNair, International status of South-West Africa, Advisory Opinion”, *I.C.J. Reports*, 1950, p. 148.

es precisamente una jurisprudencia ambigua y no uniforme en el arbitraje de inversiones.

En otras jurisdicciones internacionales también se advierten diversas posiciones.³³ Ante la Comisión de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, aunque en varios casos no se aplicó, no se rechazó la posibilidad de su existencia,³⁴ y en algún caso se reconoció como establecido en el derecho internacional.³⁵ En arbitrajes interestatales también se analizó su aplicación, como fue en el asunto *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, de 17 de septiembre de 2007,³⁶ o en *Timor Sea Conciliation (Timor-Leste/Australia)*, de 19 de septiembre de 2016. Desde el punto de vista doctrinal, también se ha intentado argumentar en determinadas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reparaciones para miembros de grupos armados en los marcos de esta doctrina, y en un sentido similar, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con respecto a limitar o excluir los daños morales en virtud del comportamiento de la víctima,³⁷ y también sobre la “conducta in-

³³ Véase, sobre este particular, “Certain Iranian Assets (*Islamic Republic of Iran v. United States of America*)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2019, párr. 177; *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, cit., párr. 418. En la doctrina se ha resaltado: “It has often been invoked, rarely applied”. Crawford, James, *Brownlie’s principles of public international law*, cit., p. 675.

³⁴ Véase, por ejemplo, en *Moussa Aryeh v. The Islamic Republic of Iran*, “[...] the Tribunal finds no evidence that would support the Respondent’s contentions that the claim should be barred on the basis of the theories of clean hands, estoppel, misrepresentation, good faith or state responsibility”. *Moussa Aryeh v. The Islamic Republic of Iran*, Award No. 583-266-3, 25 September 1997, p. 30. En *Rouhollah Karubian v. The Government of the Islamic Republic of Iran*, la demanda invocó esta doctrina, junto a estoppel, buena fe, abuso de derechos, entre otros, pero la Comisión no se pronuncia sobre su existencia o no, sino que concluye que: “The Tribunal therefore rejects the Claimant’s contention that the Respondent should be estopped from arguing that he illegally purchased real property in Iran as a dual national”. *Rouhollah Karubian v. The Government of the Islamic Republic of Iran*, Award No. 569-419-2, 6 March 1996, párr. 153.

³⁵ Con referencia expresa a B. Cheng en su *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals* de 1953, se reconoció en *Tippetts, Abbott, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran*, que: “It is a well recognized principle in many municipal systems and in international law that no one should be allowed to reap advantages from their own wrong, *Nullus Commodum Capere De Sua Injuria Propria*”. *Tippetts, Abbott, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran*, Iran-United States Claims Tribunal, Case No. 7, (Award No. 141-7-2), 29 juin 1984, párr. 28.

³⁶ *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, cit., párrs. 417-421.

³⁷ Shelton, Dinah, *Remedies in international human rights law*, 3a. ed., Oxford, Oxford Univer-

correcta del particular” en determinados asuntos para excluir la violación de disposiciones del Convenio.³⁸ En esta línea, también se ha hecho referencia expresa por algún miembro de la Corte Penal Internacional.³⁹

Hasta hace poco tiempo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) evadió posicionarse expresamente al respecto. Sin sostener de forma tajante su rechazo, como sucedió con otras instituciones,⁴⁰ durante algún tiempo pareció conceder que formaba parte del derecho internacional.⁴¹ De la forma en que

sity Press, 2015, pp. 247 y 248; Laplante, Lisa, “The law of remedies and the clean hands doctrine: exclusionary reparation policies in Peru’s political transition”, *American University International Law Review*, vol. 23, núm. 1, 2009, pp. 51-90; Constantino Caycho, Renato Antonio, “Clean hands and a pure heart?: the application of the clean hands doctrine by the Inter-American Court of Human Rights”, *Estudios de Derecho*, núm. 173, 2022, pp. 12-36. Algunos asuntos en los que se ha hecho referencia al término “clean hands”, ya sea únicamente en opiniones individuales de sus jueces, puede verse: TEDH, Gran Sala: *Chapman c. The United Kingdom*, Separate Opinion of Judge Bonello, núm. 27238/95, 2001, párr. 5, p. 42; TEDH, Sala: *Van Der Tang c. Spain*, núm. 19382/92, Separate Opinion of Judge Morenilla, 1995, párr. 49, p. 12, y párr. 6, p. 20; TEDH, Sala: *Witek c. Poland*, núm. 13453/07, 2010, párr. 38; TEDH, Sala: *Khachatryan And Kononova c. Russia*, núm. 28895/14, Partly Dissenting Opinion of Judge Serghides, 2021; TEDH, Sala: *Ukraine-Tyumen c. Ukraine*, núm. 22603/02, 2007, párr. 34; TEDH, Sala: *Margari c. Greece*, núm. 36705/16, *Dissenting Opinion of Judge Serghides*, 2023; TEDH, Sala: *Ukraine-Tyumen c. Ukraine*, núm. 22603/02, 2007, párr. 37; TEDH, Gran Sala: *K.-H.W. c. Germany*, núm. 37201/97, Partly Dissenting Opinion of Judge Pellonpää, Joined By Judge Zupančič, 2001, p. 47; TEDH, Gran Sala: *Güzelyurtlu and Others c. Cyprus and Turkey*, núm. 36925/07, Partly Dissenting Opinion of Judge Serghides, 2017.

³⁸ Véase, TEDH, Gran Sala: *Hirsi Jamaa and Others v. Italy*, núm. 27765/09, 2012; TEDH, Gran Sala: *N.D. and N.T. v. Spain*, núms. 8675/15 y 8697/15, 2020.

³⁹ *The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the Prosecution’s motion for reconsideration of the decision excusing Mr Kenyatta from continuous presence at trial*, ICC-01/09-02/11-863, Dissenting Opinion of Judge Eboe-Osuji, 26 November 2013, párr. 51.

⁴⁰ Por ejemplo, sobre el “principio” de “legítimas expectativas” alegado por Bolivia en este caso, la CIJ sostuvo: “The Court notes that references to legitimate expectations may be found in arbitral awards concerning disputes between a foreign investor and the host State that apply treaty clauses providing for fair and equitable treatment. It does not follow from such references that there exists in general international law a principle that would give rise to an obligation on the basis of what could be considered a legitimate expectation”. “Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2018, párr. 162.

⁴¹ En su momento, John Dugard sostuvo que: “That brief survey of the jurisprudence of the ICJ showed that the argument of clean hands was frequently raised in inter-State claims involving direct injury to a State. In no case had the Court relied on or upheld that doctrine, but in no case had it stated or suggested that the argument was inapplicable in inter-State claims and

analizó y rechazó su aplicación, cabía al menos inferir que no la excluía de una posible aplicación como cuestión de admisibilidad. En esos predios, la CIJ se movía con absoluta discrecionalidad para rechazar su aplicación. Visto en perspectiva, resultaba curioso que la CIJ analizara en un caso concreto la aplicación de una doctrina que evitaba reconocer y definir en sus características generales.

En la opinión consultiva *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, por ejemplo, en la que Israel consideró la aplicación de la doctrina tanto en procedimientos contenciosos como consultivos, alegó que la CIJ debía rechazar emitir la opinión en cuestión porque Palestina no se presentaba con las “manos limpias” para solicitar reparación alguna debido a su responsabilidad en actos de violación contra la población de Israel. La CIJ no se pronunció sobre estos argumentos y sólo los consideró *impertinentes*,⁴² en virtud de que la solicitud no había sido presentada por ningún Estado o entidad, sino por la Asamblea General de Naciones Unidas.⁴³ En *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*, por su parte, la Corte concluyó que no era necesario, de acuerdo con las circunstancias del caso, analizar de forma general si la conducta de un demandante podía hacer inadmisibile una demanda.⁴⁴ En igual sentido, en *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, en su sentencia de 2019, rechazó la objeción preliminar de admisibilidad de Estados Unidos sobre la base de esta doctrina, reconociendo expresamente que lo hacía “(w)ithout having to take a position on the «clean

that it applied only to cases of diplomatic protection”. “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *cit.*, p. 99. Una opinión en contra sostuvo Ian Brownlie, por ejemplo, para quien “the clean hands doctrine had not been ‘frequently raised’ by States; it had been raised only from time to time, very briefly, as a preliminary objection and always by the same States”. *Ibidem*, p. 108.

⁴² “The Court does not consider this argument to be pertinent”. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion”, *I.C.J. Reports*, 2004, párr. 64.

⁴³ “As was emphasized earlier, it was the General Assembly which requested the advisory opinion, and the opinion is to be given to the General Assembly, and not to a specific State or entity”. *Idem*.

⁴⁴ “In the circumstances of this case, there is no need for the Court to address the more general question whether there are situations in which the conduct of an applicant would be of such a character as to render its application inadmissible”. “Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2017, párr.143.

hands» doctrine”,⁴⁵ y en el que *reservaba su posición* “on the legal status of the concept itself in international law”.⁴⁶

En *Jadhav (India v. Pakistan)*, más allá de considerar su inaplicabilidad como causa de inadmisión ante un título de jurisdicción válido,⁴⁷ no aporta otros argumentos sobre su estatus jurídico en derecho internacional. Desde la sentencia de 2023 en el propio asunto *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, la CIJ enfatizó que *nunca ha reconocido* esta “doctrina” como parte del derecho internacional consuetudinario o como principio general del derecho,⁴⁸ pero no se molestó en profundizar en esta cuestión. Al referirse a ella de un modo confuso como “doctrina” (*doctrine*), de forma algo contradictoria no pareció rechazar de plano su posible aplicación; asumió evaluar si se cumplían determinadas “condiciones” para ser tomada en cuenta en la forma que había argumentado la parte demandada como defensa en cuanto al fondo del asunto.⁴⁹ En *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, insiste en su no reconocimiento por el tribunal como principio o como nor-

⁴⁵ “Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2019, párr. 122.

⁴⁶ *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment, 30 March 2023, párr. 81.

⁴⁷ “Jadhav (India v. Pakistan)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2019, párr. 61.

⁴⁸ “The Court itself has never held that the doctrine in question was part of customary international law or constituted a general principle of law”. *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment, 30 March 2023, párr. 81; *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024, párr. 37.

⁴⁹ “In its Judgment on preliminary objections in the present case, the Court noted that “the United States has not argued that Iran, through its alleged conduct, has violated the Treaty of Amity, upon which its Application is based”. (“Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, Preliminary Objections, Judgment, *cit.*, p. 44, párr. 122). “This observation is also relevant with regard to the «clean hands» doctrine relied on as a defence on the merits. In the view of the Court, there is, in any case, not a sufficient connection between the wrongful conduct imputed to Iran by the United States and the claims of Iran, which are based on the alleged violation of the «Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights»”. *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment, 30 March 2023, párr. 83.

ma de derecho consuetudinario.⁵⁰ Pero la verdad es que, aunque vuelva sobre su propia jurisprudencia para negar este estatus jurídico, evita encarar este tema con la misma profundidad que encontramos en arbitrajes de inversión.

La prudencia y el recelo en su aplicación por los tribunales tiene causa, en muchos casos, en rechazar implícitamente que principios o máximas tan genéricas, como que “no se puede permitir que nadie se aproveche de su propio mal”, o que “un hecho antijurídico no puede servir de base a una acción judicial”, se pretendan con tal fuerza y capacidad para impedir que un tribunal internacional conozca del fondo de un asunto, consentida su jurisdicción por las vías previstas. De ahí que su invocación en algunos casos, y en circunstancias particulares, se haya acusado de tratar en realidad “cuestiones políticas antes que asuntos de derecho o de jurisdicción”.⁵¹

Su no reconocimiento expreso como principio, así como posiciones bastante confusas, marcan la indefinición de su estatus en derecho internacional. Este aspecto deviene vital, como se comprenderá, porque en realidad no son pocas las veces en que se acude a las decisiones judiciales o arbitrales para identificar el reconocimiento de principios generales del derecho.⁵² A ello, se une la *dispersión* y *no homogeneidad* de su contenido, que se suma a las dificultades para su no aceptación como teoría o doctrina de *lex data* en el derecho internacional.

⁵⁰ *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024, párr. 37.

⁵¹ Mr. Brownlie se refirió en la audiencia oral en el asunto *Legality of Use of Force*, ante la búsqueda por Bélgica de la admisibilidad de la demanda yugoslava con la doctrina de las “manos limpias” y el principio de buena fe, en los siguientes términos: “This type of argument does not address issues of law or jurisdiction but is in fact addressed purely to political prejudice”. *Public sitting held on Wednesday 21 April 2004, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Shi presiding, in the case concerning the Legality of Use of Force*, Verbatim Record, 2024, p. 45.

⁵² Como se ha reconocido por el Relator Especial en la CDI sobre los principios generales del derecho, Marcelo Vázquez-Bermúdez: “A menudo se recurre a decisiones judiciales para determinar la existencia (o no) de principios generales del derecho, en particular los derivados de sistemas jurídicos nacionales, así como su contenido”. Comisión de Derecho Internacional, *Segundo informe sobre los principios generales del derecho*, Marcelo Vázquez-Bermúdez, Relator Especial, A/CN.4/741, 9 de abril de 2020, párr. 178, p. 60.

III. Una doctrina de muchas “manos limpias”: sus múltiples expresiones en la jurisprudencia internacional

De modo asiduo se invoca y se analiza esta “teoría de manos limpias” en los tribunales internacionales con referencia hacia máximas y principios, en una especie de *orden caotizado*. Es común intentar confirmar su reconocimiento jurisprudencial con apelación a decisiones judiciales y opiniones de miembros de tribunales internacionales. A su vez, estas contienen disímiles variantes en la aplicación de estos principios o máximas, en las que no siempre se reconoce su aplicación como “manos limpias”. Esta realidad indica la imposibilidad de identificar una “única” doctrina de “manos limpias”. Bajo esta denominación se presentan diversas fórmulas que no coinciden por completo en su contenido sustantivo.

Es dable destacar de inicio que, en más de una ocasión, su invocación suele asociarse con otras instituciones como abuso de derechos o abuso del proceso.⁵³ La CIJ, en el asunto *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, sobre la correcta relación entre esta doctrina y el abuso de derecho —Estados Unidos llegó a entenderla como *subparte del principio de abuso de proceso*—,⁵⁴ consideró que podía existir algún vínculo entre ambas instituciones, pero que eran distintas en cuanto a su alcance y a los actos que servían de base para su invocación.⁵⁵ En *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, la CIJ había sostenido las consecuencias diferentes entre el abuso de derecho y el abuso del proceso, más allá de advertir un

⁵³ Véase, por ejemplo, en *Legality of Use of Force*, el Reino de Bélgica sostendría de un modo algo confuso: “The principle of *abus de droit*, or the equitable doctrine of «clean hands», has long been acknowledged in both Judgments and the Separate and Dissenting Opinions of Judges of both the Permanent Court and International and has been widely held by publicists to constitute a general principle of law”. *Case Concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium)*, Preliminary Objections of the Kingdom of Belgium, 5 July 2000, párr. 479. Este hecho motivó que Mr. Brownlie, como “Counsel and Advocate” de Yugoslavia, al referirse en las audiencias orales, expresara que “(t)he Belgian Preliminary Objections seek to find a legal basis for the arguments in the doctrine of clean hands and also on the basis of good faith as a general principle of law”, y puntualice que “(i)n the first place, the applicant State is charged with abuse of process”. *Public sitting held on Wednesday 21 January 2004, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Shi presiding, in the case concerning the Legality of Use of Force*, cit., párrs. 70 y 71, p. 45.

⁵⁴ Véase, *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Preliminary Objections, cit., párr. 105.

⁵⁵ *Ibidem*, párr. 106.

concepto básico de abuso para ambos.⁵⁶ Pero por la vía del abuso del derecho o abuso del proceso poco recorrido tiene la doctrina de las “manos limpias” como cuestión de inadmisibilidad en la jurisprudencia de la CIJ. En el primero de los casos, la Corte ha reconocido su dificultad para ser aplicado como cuestión de admisibilidad.⁵⁷ En el segundo, ha considerado que ante un título válido de jurisdicción sólo de forma excepcional podría rechazarse una reclamación debido al abuso de proceso.⁵⁸

De este hecho, se refuerza la idea de una difícil homogeneización de esta doctrina que explica algunas clasificaciones defendidas por autores.⁵⁹ La bús-

⁵⁶ “Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2018, párr. 146.

⁵⁷ “On several occasions before the Permanent Court of International Justice, abuse of rights was pleaded and rejected at the merits phase for want of sufficient proof”. *Ibidem*, párr. 147. “Germany undoubtedly retained until the actual transfer of sovereignty the right to dispose of her property, and only a misuse of this right could endow an act of alienation with the character of a breach of the Treaty; such misuse cannot be presumed, and it rests with the party who states that there has been such misuse to prove his statement”. *Certain German Interests in Polish Upper Silesia*, Merits, Judgment No. 7, P.C.I.J., Series A, No. 7, 1926, p. 30; “an abuse cannot be presumed by the Court”. *Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex*, PCIJ Series A. No 24, December 6th, 1930, p. 167.

⁵⁸ *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *op. cit.*, párr. 150; *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, *op. cit.*, párr. 113. “As regards the point of abuse of the process of the Court raised in that argument, the Court does not consider that the Hellenic Government did anything improper in instituting proceedings against the United Kingdom on April 6th, 1951, in conformity with the relevant provisions of the Statute and Rules of Court”. “Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate)”, Judgment of May 19th, 1953, *I.C.J. Reports*, 1953, p. 23. En *Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*, la CIJ expuso en este sentido: “Australia’s fifth objection is that «Nauru has failed to act consistently and in good faith in relation to rehabilitation» and that therefore «the Court in exercise of its discretion, and in order to uphold judicial propriety should [...] decline to hear the Nauruan claims»”. “*Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1992, párr. 37. Con respecto a esta cuestión, la CIJ expuso: “The Court considers that the Application by Nauru has been properly submitted in the framework of the remedies open to it. At the present stage, the Court is not called upon to weigh the possible consequences of the conduct of Nauru with respect to the merits of the case. It need merely note that such conduct does not amount to an abuse of process. Australia’s objection on this point must also be rejected”. *Ibidem*, párr. 38.

⁵⁹ Véase, por ejemplo, Pomson, Ori, *op. cit.*, pp. 712-734. Se refirió a una clasificación que identificaba variantes de “manos limpias” referidas a *obligaciones recíprocas*, aquellas en las que está presente “relaciones de causalidad, o aquella conducta ilícita relacionada con el objeto del caso”.

queda por fundamentar su operatividad, en realidad es una referencia a un contenido disperso, a un conjunto de principios y máximas que intentan aplicarse a situaciones diversas.⁶⁰ En este trabajo, se opta por tratar de identificar las diversas formas en que se ha alegado o defendido en contenciosos internacionales. En este sentido, se podría resumir su invocación, aunque no agota toda su realidad; en situaciones de ilegalidad, de las que se intenta derivar un derecho, y de modo específico, a casos en que buscan desjudicializar un comportamiento ilícito por tratarse de una reacción ante incumplimientos de normas de *jus cogens* o de carácter consuetudinarias generales; como *exceptio inadimplenti non est adimplendum*; en los marcos de obligaciones recíprocas no sólo convencionales; así como en otras situaciones que conciernen a la fase de deliberación judicial, o con referencia a presuntas actuaciones de mala fe del Estado demandante. A continuación, se analizará brevemente cada una de estas expresiones.

⁶⁰ Para el juez Schwebel, por ejemplo, esta doctrina *encuentra apoyo directo* (“finds direct support”) (“Dissenting Opinion of Judge Schwebel, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”, Merits, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1986, párr. 270), en *Mavrommatis Palestine Concessions* cuando se consideró que: “M. Mavrommatis was bound to perform the acts which he actually did perform in order to preserve his contracts from lapsing as they would otherwise have done”. *The Mavrommatis Palestine Concessions*, P.C. I.J., Series A, No. 5, s. f., p. 50. También se encuentra la opinión separada del juez Ajibola en el asunto *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, al referirse a que “an applicant who ‘wants equity must do equity’ implying that that applicant ‘must come with clean hands’”. Pero esta cuestión se circunscribía a que “[...] if an applicant wants the court to exercise its equitable discretion on a matter, he must first satisfy the court that the earlier order issued by the court has been complied with, otherwise the court may refuse to make any further order”. “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, Provisional Measures, Separate Opinion of Judge Ajibola, Order of 13 September 1993, *I.C.J. Reports*, 1993, p. 395. Se ha defendido también como una expresión del principio *nullus commodum capere de sua injuria propria*, y que soporta también para algunos la doctrina de “manos limpias”, la opinión consultiva *Jurisdiction of the Courts of Danzig*, cuando el tribunal consideró que Polonia “could not avail herself of an objection which [...] would amount to relying upon the non-fulfilment of an obligation imposed upon her by an international engagement”. *Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion*, PCIJ Series B. No 15, s. f., pp. 26 y 27. Véase, al respecto: Cheng, Bin, *op. cit.*, p. 149, y la posición de Estados Unidos en *Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Counter-Memorial and Counter-Claim, Submitted by the United States of America, 23 June 1997, p. 157, nota. 348.

1. En situaciones de ilegalidad de las que se intenta derivar un derecho

Las “manos limpias” tienen expresiones concretas en principios o máximas conectados con la privación de derechos. Desde una perspectiva general, aplicable a cualquier situación, se alude a que “un acto ilegal no puede servir como base de una acción en derecho”. En la doctrina y en la posición de varios Estados se apela indistintamente a las expresiones *ex delicto non oritur actio*, *ex turpi causa non oritur actio* o *ex injuria non oritur jus*. A su vez, se entienden como manifestaciones del principio *nullus commodum capere de sua injuria propria* (“no se puede permitir que nadie se aproveche de su propio mal”),⁶¹ la que tiene a su vez diversas expresiones.⁶² Varias decisiones arbitrales en el siglo XIX se refieren de una forma u otra a la improcedencia de buscar reparaciones cuando se trata de un “derecho” nacido de un comportamiento ilícito previo.⁶³ En su momento, Hersch Lauterpacht se refirió a que se trataba de

⁶¹ Cheng, Bin, *op. cit.*, p. 155.

⁶² Véase, Kolb, Robert, “La maxime «*nemo ex propria turpitudine commodum capere potest*» (*Nul ne peut profiter de son propre tort*) en droit international public”, *Revue belge de droit international*, núm. 1, 2000, pp. 84-136.

⁶³ Véase, por ejemplo, los asuntos *The Good Return* y *The Medea* (comisionado Hassaurek). Se trataba de unos hechos que involucraban capturas de barcos españoles por un capitán norteamericano llamado Clark, y que fueron autorizadas por la República de la Banda Oriental (posteriormente Uruguay), entonces en guerra contra España y Portugal. Apresado por la República de Venezuela alguno de estos barcos capturados por Clark, esta República en 1819 se unificó con Nueva Granada y conformaron la República de Colombia, la cual se desintegró en 1830 en varios Estados: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Distintas comisiones arbitrales se conformaron entre estos Estados y los Estados Unidos, pero vale resaltar la conformada por la convención entre Estados Unidos y Ecuador de 25 de noviembre de 1862. Al considerar que Clark había violado leyes norteamericanas y estipulaciones de tratados entre España y Estados Unidos, en actos que caracterizó como *piratería*, el comisionado razonó, *inter alia*: “What right, under these circumstances, has Captain Clark, or his representatives, to call upon the United States to enforce his claim on the Colombian republics? Can he be allowed, as far as the United States are concerned, to profit by his own wrong? *Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facit* [...] A party who asks for redress must present himself with clean hands”. “Cases of the Good Return and the Medea, opinion of the Commissioner, Mr. Hassaurek, of 8 August 1865”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XXIX, United Nations, 1865, p. 107. Cheng, Bin, *General principles of law as applied by international courts and tribunals*, Cambridge Grotius Publications Limited, 1987, pp. 155 y 156; Moore, John Bassett, *History and digest of the international arbitrations to which the united states has bee party*, vol. III, Washington, Government Printing Office, 1898, p. 2739. Este criterio sería recordado en otro asunto de la Comisión Americana-venezolana, “Jarvis Case, 1903-1905”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. IX, United Nations, p. 213. En igual

un principio reconocido por todas las “naciones civilizadas”, y que constituía “one of the fundamental maxims of jurisprudence”.⁶⁴

Una temprana aplicación de este principio se encuentra en el Tribunal Permanente de Justicia, en el asunto *Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex*. Las transformaciones en las condiciones económicas de una transferencia unilateral de una línea de aduana por Francia, no conforme a derecho, no podía ser aducido contra Suiza, a juicio del tribunal.⁶⁵ Dionisio Anzilotti, en su opinión disidente en el asunto *Legal Status of Eastern Greenland*, al considerar que Noruega buscaba del tribunal una declaración sobre la legalidad y validez de una ocupación, expuso que debía rechazarse esa pretensión en virtud de que “an unlawful act cannot serve as the basis of an action at law”.⁶⁶

Una expresión concreta de estas formulaciones generales, bastante citada e invocada en contenciosos internacionales, se encuentra en Gerald Fitzmaurice. Con base en los mencionados principios de equidad trasplantados del derecho inglés como “he who seeks equity must do equity”, así como que “he who comes to equity for relief must come with clean hands”, sostuvo:

[...] a State which is guilty of illegal conduct may be deprived of the necessary *locus standi in judicio* for complaining of corresponding illegalities on the part of other States, especially if these were consequential on or were embarked upon in order to counter its own illegality—in short were provoked by it.⁶⁷

Expuesta de esta forma, se presenta como un aspecto procesal en el marco del ejercicio de las contramedidas. El propio Fitzmaurice la aborda en un subcapítulo de su curso *The General Principles of International Law considered from the standpoint of the Rule of Law*, titulado “The Place of Reprisals”. No aparece como una represalia o contramedida en sí misma, sino como una consecuencia de índole procesal a tomar en cuenta ante este tipo de situaciones. En su operatividad, se separa lo que serían para entonces “represalias legítimas” (*le-*

sentido en el caso *Montijo*, en virtud del convenio entre Estados Unidos y Colombia de 17 de agosto de 1874, donde se estableció claramente que “No one can be allowed to take advantage of his own wrong”. Moore, John Bassett, *History and digest of the international arbitrations to which the United States has been party*, vol. II, Washington, Government Printing Office, 1898, p. 1437.

⁶⁴ Lauterpacht, Hersch, *Recognition in international law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1947, p. 420.

⁶⁵ *Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex*, cit., p. 16.

⁶⁶ “Opinion Dissidente de M. Anzilotti, Legal Status of Eastern Greenland”, PCIJ Series A/B., No 53, Judgment, 5 April 1933, p. 95.

⁶⁷ Fitzmaurice, Gerald, *op. cit.*, p. 119 (énfasis añadido).

gitimate reprisals), que excluía la ilicitud de la represalia, y aquellos actos que no dejaban de ser ilícitos. Para estos últimos, consideraba que debían cumplirse algunos requisitos (conexidad entre las acciones ilícitas y proporcionalidad) para que pudiera invocarse la pérdida del *locus standi in judicio* del Estado comisor de la ilicitud previa. No obstante, en opinión de Fitzmaurice, existían conductas ilícitas de los Estados que no podrían ser justificadas ni podrían impedir el derecho de acudir a los tribunales del Estado lesionado, aun cuando éste hubiera cometido una ilicitud previa: aquellas que en su criterio eran “malas en sí misma” (*malum in se*), tales como “violaciones de los derechos humanos” o violaciones de normas con carácter de *jus cogens*, entre otras más específicas.⁶⁸

Esta variante es la que está presente en la opinión disidente, tantas veces citada en la jurisprudencia y en la doctrina, del juez Schwebel, en el asunto *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (*Nicaragua v. United States of America*) de la CIJ, donde Nicaragua inició un proceso contra Estados Unidos por su responsabilidad en las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Para el juez estadounidense, Nicaragua se presentaba en este contencioso con “las manos odiosamente sucias” (“*Nicaragua’s hands are odiously unclean*”), porque había sido “the aggressor, indirectly responsible—but ultimately responsible—for large numbers of deaths and widespread destruction in El Salvador apparently much exceeding that which Nicaragua has sustained”.⁶⁹ En su criterio:

Its conduct [Nicaragua] accordingly should have been reason enough for the Court to hold that Nicaragua had deprived itself of the necessary *locus standi* to complain of corresponding illegalities on the part of the United States, especially because, if these were illegalities, they were consequential on or were embarked upon in order to counter Nicaragua’s own illegality - “in short were provoked by it”.⁷⁰

En un grupo de casos ante la CIJ, se puede advertir esta modalidad: es la que invocó Estados Unidos en el asunto *Oil Platforms* (*Islamic Republic of Iran v. United States of America*), cuyas acciones contra las plataformas iraníes en el Golfo Pérsico se justifican por el uso de la fuerza ilícito previo por Irán;⁷¹ en

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 119 y 120.

⁶⁹ “Dissenting Opinion of Judge Schwebel, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (*Nicaragua v. United States of America*)”, *cit.*, párr. 269.

⁷⁰ *Ibidem*, párr. 272.

⁷¹ Véase “*Oil Platforms* (*Islamic Republic of Iran v. United States of America*)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2003, párrs. 29 y 30.

los marcos de la solicitud de medidas provisionales por Yugoslavia en *Legality of Use of Force*, por las posiciones de Estados Unidos,⁷² Canadá,⁷³ Holanda,⁷⁴ Reino Unido,⁷⁵ y Portugal,⁷⁶ con respecto a graves violaciones de derechos

⁷² Estados Unidos alegó que “the Applicant does not come to the Court with clean hands”, en tanto “(h)aving committed a campaign of extensive ethnic cleansing and other atrocities in Kosovo, the Applicant has now come to the Court asking for protection against the consequences of those unlawful acts”. Véase M. John R. Crook, de Estados Unidos en *Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 4.30 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of America) Request for the indication of provisional measures*, Verbatim Record, 1999, párr. 3.17.

⁷³ El agente canadiense expresó “that it would be an inappropriate use of the power under Article 41 to lend aid and comfort to an applicant that comes to the Court, in such a matter as this, without clean hands. It would be a tragically misguided use of the power to lend credence to the unsubstantiated humanitarian accusations of a party whose own humanitarian abuses are at the root of the present dispute. It would turn reality on its head”. *Public Sitting held on Monday 10 May 1999, at 4.15 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Canada) Request for the indication of provisional measures*, Verbatim Record, 1999, p. 7.

⁷⁴ El agente de Holanda sostuvo: “What we see today is that the Court is faced by a request for the indication of provisional measures by a State which comes to the Court with extremely dirty hands and asks the Court to impose provisional measures on members of the international community who oppose the criminal policy of the Federal Republic of Yugoslavia in Kosovo and try to protect the basic human rights of the Kosovo population”. *Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 11.55 am, at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Netherlands) Request for the indication of provisional measures*, Verbatim Record, 1999, párr. 44, p. 15.

⁷⁵ Por Reino Unido, Mr. John Morris sostuvo que “the Court may readily reach the conclusion that what the Federal Republic of Yugoslavia wants to achieve is to use the Court’s processes to secure for itself a free hand to complete its planned campaign of «ethnic cleansing»”. Seguidamente expuso: “In my own legal system a remedy like «provisional measures» would lie at the discretion of the Court. In considering whether or not to exercise that discretion, the Court would weigh up all the equities. In weighing up all the equities, the Court would pay particular attention as to whether the party seeking its assistance came with clean hands. The Court would not, however, allow its process to be used as an engine to assist turpitude. I can see no reason why exactly the same principles should not be applied by this honourable Court. They are deeply rooted in the essential nature of the judicial function. They should be regarded as «general principles of law» within the meaning of Article 38 of the Statute”. *Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 3 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United Kingdom) Request for the indication of provisional measures*, Verbatim Record, 1999, párr. 24, pp. 15 y 16.

⁷⁶ El agente de Portugal sostuvo: “The facts that are at the origin of the request for provi-

humanos por parte de las autoridades yugoslavas; en *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, cuando Estados Unidos buscó inadmitir la demanda iraní con base en comportamientos ilícitos de este Estado, consistentes en violaciones de resoluciones del Consejo de Seguridad referidas a programas nucleares, en actividades de apoyo al terrorismo, tráfico de armas, etcétera;⁷⁷ así como las causas que alegó Rusia contra Ucrania en el fondo del asunto en *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, a la que acusaba de incumplir el “Paquete de Medidas para la Implementación de los Acuerdos de Minsk de 2015”, realizar bombardeos en áreas residenciales y la utilización de armas indiscriminadas contra civiles en el este de Ucrania, entre otros, con relación al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo,⁷⁸ así como ausencia de protección de grupos étnicos en Crimea por parte de Ucrania antes de 2014, y violencia, discursos de odio, vandalización, desempleo, ausencia de vivienda adecuadas y restricción del uso del idioma y cultura rusos contra grupos étnicos fuera de Crimea con referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Ucrania c. Federación de Rusia).⁷⁹

Se debe destacar que el *Proyecto de Responsabilidad de la CDI*, después de un examen por su relator, no incluyó esta doctrina entre las circunstancias de exclusión de la ilicitud, como ya hemos hecho referencia.⁸⁰ Sobre este pasaje citado de Fitzmaurice, el relator James Crawford fundamentó esta exclusión

sional measures have been caused by the illicit conduct of the Federal Republic of Yugoslavia, according to international law common standards. Bearing in mind the «clean hands» criterion, the request of the Federal Republic of Yugoslavia is not legitimate”. *Public Sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 12.20 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Portugal) Request for the indication of provisional measures*, Verbatim Record, 1999, párr. 3.1.4, p. 11.

⁷⁷ *Islamic Republic of Iran v. United States of America*, Preliminary Objections submitted by The United States of America, cit., párrs. 634-638.

⁷⁸ *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024, párr. 34.

⁷⁹ *Ibidem*, párr. 153.

⁸⁰ El Relator especial en sus comentarios expresó: “The so-called «clean hands» doctrine has been invoked principally in the context of the admissibility of claims before international courts and tribunals, though rarely applied. It also does not need to be included here. “Draft articles on

al explicar que se trataba de “procedural questions as *locus standi*”, o referido a “the admissibility of claim”, además de apuntar que “it is significant that [...] it is not suggested that the illegal conduct of an injured State (still less its lack of «clean hands») is a distinct circumstance precluding the wrongfulness of the conduct which caused injury to that State”.⁸¹

En verdad, cualquier referencia a este acto de privación como contramedida no encuentra asidero doctrinal ni jurisprudencial, y desconocería la operatividad y los rasgos de la propia institución. Esta no sería una reacción en contramedida de un Estado frente a otro Estado por un ilícito previo. Buscar la privación del *locus standi in iudicio* implica instar ante un tribunal internacional, que sería el que determinaría si procede o no tal privación, ya sea como una cuestión de jurisdicción o de admisibilidad. Este elemento, que introduce un componente jerárquico a decidir en la relación entre dos Estados, desplaza las propias características en que actúan y se justifican las contramedidas entre Estados en sus relaciones horizontales.

2. La “doctrina de manos limpias” como *exceptio inadimplenti non est adimplendum*

Del principio *nullus commodum capere de sua injuria propria* (“no se puede permitir que nadie se aproveche de su propio mal”), que deriva de otros principios o máximas de equidad y de buena fe, también se comprende la existencia de figuras aplicadas a casos específicos que se han defendido en los marcos de la “doctrina” de “manos limpias”. Aunque en realidad se ha tratado de distinguir de las “manos limpias”,⁸² en no pocas ocasiones se suma como apoyo de la existencia de esta doctrina en derecho internacional. Este es el caso de la institución *exceptio inadimplenti non est adimplendum*. En el marco de que nadie puede beneficiarse de su propio comportamiento ilícito, aborda el cumplimiento de una obligación sinalagmática condicionada al cumplimiento de esta obligación por la otra parte de forma continuada.⁸³

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, Part Two, 2001, p. 72.

⁸¹ Crawford, James, “Second report on State responsibility”, *cit.*, párr. 335, p. 83.

⁸² Véase “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *cit.*

⁸³ Sobre este principio ver: Xiouri, Maria, “The *exceptio non adimpleti contractus* in public international law”, *International Community Law Review*, vol. 21, núm. 1, 2019, pp. 56-92; Fon-

En esta institución se ha identificado un concepto restringido, caracterizado por “un vínculo causal entre el incumplimiento de la obligación por el Estado A y su incumplimiento por el Estado B”,⁸⁴ y un concepto amplio, que “tiene que ver con las obligaciones sinalagmáticas o interdependientes, cada una de las cuales se considera en realidad contraparte de la otra”.⁸⁵ Del mismo modo, se plantea la existencia de una concepción distinta a las anteriores, sostenida en *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, cuando la ilicitud de los comportamientos se manifiesta de forma independiente, es decir, sin que una violación previa sea la causa que impida el cumplimiento de una obligación posterior.⁸⁶

Entre los ejemplos de un concepto restringido se encuentra el famoso asunto *Chorzów Factory*, de 1927, ante el Tribunal Permanente de Justicia. En esa oportunidad, el tribunal consideró que

[...] a principle generally accepted in the jurisprudence of international arbitration, as well as by municipal courts”, es que “one Party cannot avail himself of the fact that the other has not filled some obligation or has not had recourse to some means of redress, if the former Party has, by some illegal act, prevented the latter from fulfilling the obligation in question, or from having recourse to the tribunal which would have been open, to him.”⁸⁷

Otro ejemplo se muestra en procedimientos consultivos. En una opinión de 30 de marzo de 1950, la CIJ había declarado que Bulgaria, Hungría y Rumania estaban obligados a nombrar representantes en una comisión arbitral conforme a disposiciones sobre solución de controversias establecidas en los tratados de paz de 1947. La posición de las partes no varió desde esta opinión, y la CIJ fue solicitada una vez más para considerar la posibilidad del Secretario General de nombrar a un tercer miembro de la Comisión (esta-

tanelli, Filippo, “The invocation of the exception of non-performance: a case-study on the role and application of general principles of international law of contractual origin”, *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, vol. 1, núm. 1, 2012, pp. 119-136; Crawford, James y Olleson, Simon, “The exception of non-performance: links between the law of treaties and the law of State responsibility”, *Australian Year Book of International Law*, núm. 21, 2000, pp. 55-74.

⁸⁴ Crawford, James, *Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados*, Relator Especial, Documento A/CN.4/498 y Add.1 a 4, s. f., párr. 328, p. 89.

⁸⁵ *Idem*.

⁸⁶ *Idem*.

⁸⁷ *Chorzów Factory (Jurisdiction)*, PCIJ Rep Series A no 9, 1927, p. 31.

ba facultado por el mismo tratado para nombrar un tercer miembro a falta de acuerdo entre las partes), aun en caso de que una de las partes no hiciera lo mismo. La CIJ rechazó esta posibilidad porque, en tal situación, la Comisión estaría compuesta por dos miembros, y no por tres, como se establecía en el tratado. Se ha considerado que en este punto el tribunal se negó a aplicar el principio *exceptio inadimplenti non est adimplendum* desde una concepción amplia con base en el principio de reciprocidad, al considerar que “The breach of a treaty obligation cannot be remedied by creating a Commission which is not the kind of Commission contemplated by the Treaties”.⁸⁸

Una concepción amplia de esta institución, identificada en algunos casos como ejemplo de aplicación de “manos limpias”, se encuentra en casos como *Diversion of Water from the Meuse*. Holanda consideró que era ilícito, en virtud de un tratado de 1863, que Bélgica tomara agua de un exclusiva perteneciente a su sector. Holanda había realizado acciones similares previamente. Al abordar la admisibilidad de una pretensión alternativa presentada por Bélgica, que invocó la pérdida del derecho de Holanda a basarse en este tratado de 1863 contra ella por sus acciones previas, el Tribunal Permanente consideró: “[...] the Court finds it difficult to admit that the Netherlands are now warranted in complaining of the construction and operation of a lock of which they themselves set an example in the past”.⁸⁹

⁸⁸ “Interpretation of Peace Treaties (second phase)”, Advisory Opinion, *I.C.J. Reports*, 1950, p. 229. Véase, sobre esto a Crawford, James, *Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados*, cit., p. 87, párr. 322; “Fourth report by Sir Gerald Fitzmaurice, Special Rapporteur”, Document A/CN.4.1120, *Yearbook of The International Law Commission*, Vol. II, 1959, p. 70 y 71, párr. 102 y 105. Sin embargo, en este mismo caso el juez Read disintió de la opinión del tribunal, bajo la idea de que un Estado incumplidor no podía objetar la competencia de un tribunal. En las circunstancias del caso, si esta objeción fuera ante la Comisión arbitral, ésta podía, conforme a lo considerado en *Chorzów Factory* y en el derecho internacional vigente, “refuse to let such a government profit from its own wrong”, del mismo modo que la Corte Internacional de Justicia debía “to apply existing legal principles and recognize that it was estopped from alleging its own treaty violation in support of its own contention”. “Dissenting Opinion of Judge Read, Interpretation of Peace Treaties (second phase)”, Advisory Opinion, *I.C.J. Reports*, 1950, p. 244.

⁸⁹ *Diversion of Water from the Meuse*, PCIJ Series A/B. núm. 70, s. f., p. 25; Cfr. “Dissenting Opinion of Judge Schwebel, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”, cit., párr. 240. Este asunto contó con la opinión del juez Hudson, considerada posteriormente por Schewel como una “variation of the «clean hands» doctrine” y donde “(t)hat principle was developed at length”. “Dissenting Opinion of Judge Schwebel, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of Ame-

Por su parte, y haciendo alusión a una variante con elementos distintos, se encuentra el asunto *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)* de 1997. La CIJ consideró, con expresa referencia a *Chorzów Factory*, que Hungría estaba privada del derecho de dar por terminado el Tratado de Budapest, de 16 de septiembre de 1977, concerniente a la construcción y operación del sistema de presa Gabčíkovo-Nagymaros. Checoslovaquia había desviado de forma unilateral las aguas del Danubio para poner en marcha su “variante C”; pero Hungría previamente había suspendido desde 1989, sin justificación, parte del proyecto.⁹⁰ Aunque se ha expuesto como un ejemplo de aplicación de *exceptio inadimplenti non est adimplendum*, se ha considerado que la relación de causalidad entre las violaciones presentes en los hechos no se expresó en los términos exactos de *Chorzów Factory*, sino de forma independiente.⁹¹

rica)”, *cit.*, párr. 269. Con referencia al principio de equidad en general, y sus expresiones en el derecho inglés como “Equality is equity” o “He who seeks equity must do equity” o en la *exceptio non adimplenti contractus* del derecho romano, consideró: “It would seem to be an important principle of equity that where two parties have assumed an identical or a reciprocal obligation, one party which is engaged in a continuing nonperformance of that obligation should not be permitted to take advantage of a similar non-performance of that obligation by the other party”. *Diversion of Water from the Meuse*, Individual Opinion by Mr. Hudson, PCIJ Series A/B., No. 70, s. f., p. 77. El propio juez Hudson fue consciente de la cautela a tener en la aplicación amplia del principio de equidad como «principio general», en los términos de que debe tener “a very sparing application”. *Ibidem*, p. 77. En este propio asunto el juez D. Anzilotti se pronunció también en esta dirección: “[...] I am convinced that the principle underlying this submission (*inadimplenti non est adimplendum*) is so just, so equitable, so universally recognized, that it must be applied in international relations also. In any case, it is one of these ‘general principles of law recognized by civilized nations’ which the Court applies in virtue of Article 38 of its Statute”. *Diversion of Water from the Meuse*, Dissenting Opinion of M. Anzilotti, PCIJ Series A/B., No. 70, s. f., p. 50.

⁹⁰ “Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1997, párr. 110.

⁹¹ Crawford, James, *Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados*, *cit.*, párr. 319, p. 86. En este caso, la CIJ consideró: “The Court, however, cannot disregard the fact that the Treaty has not been fully implemented by either party for years, and indeed that their acts of commission and omission have contributed to creating the factual situation that now exists. Nor can it overlook that factual situation—or the practical possibilities and impossibilities to which it gives rise—when deciding on the legal requirements for the future conduct of the Parties”.

“This does not mean that facts—in this case facts which flow from wrongful conduct—determine the law. The principle *ex injuria jus non oritur* is sustained by the Court’s finding that the legal relationship created by the 1977 Treaty is preserved and cannot in this case be treated as

En cualquier caso, es un principio controvertido que se ha debatido entre el derecho de tratados y la responsabilidad del Estado, aunque no fue incluido ni en la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados ni en el Proyecto de Artículos sobre responsabilidad.⁹² No escapa tampoco a ser analizado en si sólo puede circunscribirse al ámbito de las obligaciones convencionales,⁹³ o si se trata de una norma de derecho consuetudinario o un “principio general del derecho”.⁹⁴ En las propuestas y discusiones sobre “responsabilidad internacional del Estados” en la CDI, la *exceptio inadimplenti non est adimplendum* y la doctrina de “manos limpias” fueron tratadas de forma diferente. Su exclusión obedeció a que se trataba de “una característica específica de ciertas obligaciones mutuas o sinalagmáticas”⁹⁵ y no “una circunstancia que excluye la ilicitud”, mientras que las “manos limpias” se defendían en su invocación principalmente en el marco de la “admisibilidad de demandas ante tribunales internacionales”.⁹⁶

Esta diferenciación, no obstante, resultaba un poco artificiosa, o por lo menos desatendía la realidad de *género* y *especie* existente entre ellas en determinadas situaciones. Si bien la figura de la *exceptio inadimplenti non est adimplendum* se constriñe al ámbito de *ciertas obligaciones mutuas o sinalagmáticas*, y la doctrina de las “manos limpias” busca el fundamento para inadmitir una demanda en un amplio espectro relativo a la responsabilidad internacional (como la protección diplomática, violaciones de normas de *ius cogens*, etcétera), ello no descarta que la búsqueda de este fundamento para inadmitir puede descansar en razones defendidas como *exceptio inadimplenti non est adimplendum*. Es a este supuesto al que seguidamente se hace referencia.

voided by unlawful conduct”. “Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)”, *cit.*, párr. 133.

⁹² “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *cit.*, p. 72.

⁹³ Se ha expresado que este principio de *exceptio* no sólo se aplica a las obligaciones convencionales: “no hay motivo para pensar que la *exceptio*, como se formula en el fallo *Usine de Chorzów*, no sea aplicable a todas las obligaciones internacionales, independientemente de su origen”. Crawford, James, *Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados*, *cit.*, párr. 327, p. 89.

⁹⁴ Véase, sobre esto: Xiouri, Maria, *op. cit.*, pp. 56-92; Fontanelli, Filippo, *op. cit.*, pp. 119-136.

⁹⁵ “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *cit.*, p. 72.

⁹⁶ *Idem*.

3. Violación continuada de una obligación recíproca: base para una reclamación fundada en las “manos limpias”

Algunos requisitos o condiciones, que imprimen rasgos de “variante” a la aplicación de esta doctrina de “manos limpias”, se avanzaron en el arbitraje *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)* de 17 de septiembre de 2007. Sobre la base de anteriores decisiones judiciales u opiniones de jueces que comúnmente se citan como soporte de esta teoría,⁹⁷ en esta se caracterizaron algunos requisitos de esta doctrina para el caso en que se entendiera establecida en el derecho internacional (“to the extent that such a doctrine may exist in international law”). En primer lugar, se expone la necesaria “continuidad del incumplimiento de la obligación” al momento de la invocación de la doctrina (“is the continuing nature of the non-performance of an obligation”).⁹⁸ Como segunda cuestión, la obligación violada debe ser una “obligación recíproca” entre ambos Estados sobre la que se funda la demanda.⁹⁹ En este sentido no vale alegar la violación de una obligación distinta de la que sirve de base al contencioso. Al rechazar las objeciones de Surinam para inadmitir las pretensiones de Guyana sobre la base de esta “teoría” de las “manos limpias”, se consideró:

Guyana’s Third Submission claims that Suriname violated its obligation not to resort to the use or threat of force, while Suriname bases its clean hands argument on Guyana’s alleged violation of a different obligation relating to its authorisation of drilling activities in disputed waters. Therefore, there is no question of Guyana itself violating a reciprocal obligation on which it then seeks to rely.¹⁰⁰

Esta última posición también parece que se sostiene por la CIJ en el ámbito convencional, ya sea cuando el tratado no constituye el instrumento que fundamenta la jurisdicción del tribunal, o no se aplica al fondo del asunto. En

⁹⁷ Véase, por ejemplo: *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, cit., párrs. 417-421.

⁹⁸ *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, cit., párr. 420. Como característica, el tribunal entiende que está expresada en *Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000*, en *United States Diplomatic, en Consular Staff in Tehran case*, y en *Water from the Meuse case*. De este modo sostuvo que “Guyana had not authorised any drilling activities subsequent to the CGX incident and was as a result not in violation of the Convention as alleged at the time it made its Third Submission to the Tribunal”. *Ibidem*, párr. 421.

⁹⁹ *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, cit., párr. 421.

¹⁰⁰ *Ibidem*, párr. 421.

Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), al analizar la aplicación de la doctrina de “manos limpias”, se sostuvo de inicio que: “[...] the Court notes that Somalia is neither relying on the MOU (Memorandum of Understanding) as an instrument conferring jurisdiction on the Court nor as a source of substantive law governing the merits of this case”.¹⁰¹ Esto también se encuentra en *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, cuando apunta que “(t)he Court begins by noting that the United States has not argued that Iran, through its alleged conduct, has violated the Treaty of Amity, upon which its Application is based”.¹⁰²

En un sentido similar se expresó la comisión de conciliación en *Timor Sea Conciliation (Timor-Leste/Australia)* al analizar las objeciones a la admisibilidad del procedimiento planteadas por Australia. La solución de la controversia se planteaba en torno a la Convención del Derecho del Mar, pero Australia en forma de “objeción subsidiaria” (“*subsidiary objection*”) argumentó que Timor-Leste se beneficiaría de un incumplimiento de otro tratado entre ellos —Tratado sobre Ciertos Arreglos Marítimos en el Mar de Timor— si la Comisión procedía a la conciliación. La Comisión entendió que valorar en el marco de la doctrina de “manos limpias” la violación de un tratado distinto al que servía de base para la solución de la controversia, consistía en “a variation of the clean hands doctrine” como se había expuesto en *Diversion of Water from the Meuse*.¹⁰³ Como expresó la Comisión, era una situación en que “Australia asks the Commission to find a breach of another instrument [...] in the overall legal relationship between the Parties and to give that breach decisive effect with respect to the Commission’s competence under the Convention”.¹⁰⁴ En este sentido, la Comisión rechazó aplicar esta doctrina, *inter alia*, al considerar que

The alleged breach of CMATS [*Tratado sobre Ciertos Arreglos Marítimos en el Mar de Timor*] is not an established fact, and the clean hand doctrine does not extend so far as to make the possible breach of some other agreement, such as CMATS, a bar to dispute resolution proceedings. The effect of these proceedings on CMATS, like

¹⁰¹ “Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)”, *cit.*, párr. 142.

¹⁰² *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, *op. cit.*, párr. 122.

¹⁰³ “Timor Sea Conciliation (Timor-Leste/Australia)”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XXXIV, United Nations, 19 September 2016, párr. 90.

¹⁰⁴ *Idem*.

the question of the validity of CMATS, is a matter for the Parties to consider in another forum.¹⁰⁵

4. Otras expresiones de la doctrina de “manos limpias”

En algunos casos se ha invocado el principio de buena fe para sustentar la existencia de esta doctrina de “manos limpias”. Esto implica que la identidad entre este principio y el principio de buena fe es la confusión entre la premisa general y una de sus derivadas. Aunque se reconoce que se fundamenta en este principio —y por tanto no debería coincidir en su aspecto sustantivo—, en no pocas ocasiones se hace converger ambos en su contenido, y ello conlleva que se identifiquen en sus efectos. Esto quiere decir que lo general asume la identidad de lo particular, sin apenas consecuencias generales o particulares a distinguir. En este punto, con apoyo en las posiciones sostenidas por Gerald Fitzmaurice y Schwebel, el juez Van Den Wyngaert, en el asunto *Arrest Warrant of 11 April 2000*, relacionó la aplicación directa de esta doctrina para no admitir la demanda, con lo que entendía era una actuación de mala fe del Congo con respecto a Bélgica. En su criterio:

In blaming Belgium for investigating and prosecuting allegations of international crimes that it was obliged to investigate and prosecute itself, the Congo acts in bad faith. It pretends to be offended and morally injured by Belgium by suggesting that Belgium’s exercise of “excessive universal jurisdiction”.¹⁰⁶

Pretender asignar efectos particulares a la doctrina de “manos limpias” desde el propio principio de buena fe tiene varios inconvenientes. El principal es que la CIJ ha considerado en más de una ocasión que el principio de buena fe no constituye, en sí mismo, una fuente de obligaciones. En *Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)*, se expresó con claridad en este sentido: “The principle of good faith is, as the Court has observed, «one of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations» (*Nuclear Tests, I.C.J. Reports 1974*, p. 268, para. 46; p. 473, para. 49); *it is not in itself a source of obligation where none would otherwise exist*” (énfasis añadido).¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibidem*, párr. 92.

¹⁰⁶ “Dissenting Opinion of Judge Van Den Wyngaert, *Arrest Warrant of 11 April 2000* (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2002, p. 160.

¹⁰⁷ “*Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)*”, Jurisdiction and Ad-

Es por esta causa que se ha defendido, con razón, que este principio por sí mismo no puede servir tampoco de condicionamiento para considerar la admisibilidad de una demanda.¹⁰⁸

En igual sentido, la doctrina de “manos limpias” ha tenido implicaciones en fases de deliberación judicial cuando determinados hechos pueden afectar o incidir en el correcto ejercicio de la función judicial. Es frecuente también, en apoyo a la existencia de la doctrina de “manos limpias” en derecho internacional, aludir a la opinión disidente de los jueces Morozov y Tarazi en el asunto *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran*.¹⁰⁹ Esta última referencia demuestra la amplitud de opiniones jurídicas que intentan fundamentar esta “doctrina”, aun y cuando se manifiesten de diversas formas. No era una situación en la que se debatía una violación previa de una obligación recíproca entre ambos Estados para impedir su admisibilidad (es decir, no se presenta de inicio el Estado con las “manos sucias”), sino que se trataba de hechos sobrevenidos durante el proceso que podían tener alguna incidencia en el correcto ejercicio de la función judicial.

Al tomar en cuenta que Estados Unidos había emprendido acciones contra Irán con un saldo de cuantiosos daños, mientras se deliberaba la responsabilidad de este último y las posibles reparaciones, el juez Morozov consideró que “the Applicant has forfeited the legal right as well as the moral right to expect the Court to uphold any claim for reparation”.¹¹⁰ Este ejemplo se ha clasificado en la doctrina como una variante de “manos limpias” que se refiere a una “unlawful conduct relating to the subject-matter of the case”.¹¹¹ En este mismo asunto, la opinión del juez Tarazi, al considerar que las acciones de Estados Unidos, constituían “an encroachment on the functions of the Court”,¹¹² determinó que en tales situaciones Irán sólo podría asumirse responsable si “the Government of the United States of America, by reason of

missibility, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1988, párr. 94.

¹⁰⁸ Cfr. *Case Concerning Certain Phosphate Lands In Nauru I (Nauru v. Australia)*, Preliminary Objections of Australia, Written Statement of Nauru, s. f., párrs. 408 y 409.

¹⁰⁹ Véase, por ejemplo, *Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, cit., párr. 418.

¹¹⁰ “Dissenting Opinion of Judge Morozov, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment”, *I.C.J. Reports*, 1980, p. 53.

¹¹¹ Pomson, Ori, *op.cit.*, p. 723.

¹¹² “Dissenting Opinion of Judge Tarazi, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1980, p. 64.

its conduct both before and after the institution of proceedings, has equally incurred responsibility”.¹¹³

En este mismo sentido, se puede ubicar la opinión disidente del entonces vicepresidente Weeramantry en *Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium)*, iniciado con la demanda de Yugoslavia contra Bélgica por violaciones a la prohibición del uso de la fuerza. Bélgica alegó que Yugoslavia no se presentaba con las “manos limpias”, porque sus acciones habían constituido violaciones graves a los derechos humanos, que continuaban durante el proceso ante la CIJ. En este contexto, donde el juez vicepresidente Weeramantry consideró esta doctrina como “a principle of equity and judicial procedure, well recognized in all legal systems”, expresó:

It is not for the Court to pronounce at this stage upon the merits of the allegations on either side. It is patently clear however that it is a precondition to the granting of any relief to the Applicant that if the Applicant is engaged on a course of violence relevant to the subject-matter of the Application, that violence should immediately cease.¹¹⁴

IV. ¿Cuestión de *admisibilidad* o de fondo en el contencioso interestatal ante la Corte Internacional de Justicia? La aplicación de la “doctrina de las manos limpias” y la *institucionalización* del orden jurídico internacional

En el marco de los contenciosos interestatales, como también se suscita en otros regímenes,¹¹⁵ no existe consenso sobre la aplicación de esta doctrina en el supuesto que se acepte como institución del derecho internacional. En alguna opinión, en la doctrina se negaba su aplicación como cuestión de admi-

¹¹³ *Ibidem*, p. 65.

¹¹⁴ “Dissenting Opinion of Vice-President Weeramantry, *Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium)*”, Provisional Measures, Order of 2 June 1999, *I.C.J. Reports*, 1999, p. 184.

¹¹⁵ Una muestra de esta misma controversia en el arbitraje inversor-Estado puede verse en *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*: “However, even accepting that the objection is serious and substantial, *quod non*, it is conceivable that the alleged illegalities would be part of the defense of the Respondent against breaches of the BIT. Thus, it seems that this objection cannot be addressed without touching on the merits of this dispute”. *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, PCA Case No. 2016-39, Procedural Order No. 2: Decision on Bifurcation, s. f., párr. 47.

sibilidad, para considerar su posibilidad como materia del fondo,¹¹⁶ mientras que otros apelaron a la duda en la práctica sobre la fase del proceso a la que en realidad corresponde su aplicación.¹¹⁷ Se asumió también, en algún sector influyente de los internacionalistas, que no era posible determinar una línea definida sobre los hechos que pueden ser analizados de forma preliminar o como cuestiones de fondo cuando se trata de esta doctrina.¹¹⁸

En la jurisprudencia de la CIJ, esta realidad controvertida y escurridiza se constató en varios asuntos. Sobre la posibilidad de ser reconocida como causa de inadmisibilidad, el cerco se fue cerrando paulatinamente en su jurisprudencia. En varios asuntos se sostuvo que el incumplimiento de una obligación convencional previa por una de las partes, y relacionada con el objeto de la disputa, no servía como base para inadmitir una demanda en la jurisprudencia de la CIJ.¹¹⁹ En *Jadhav (India v. Pakistan)* se despejó cualquier duda sobre esta

¹¹⁶ En las discusiones de la CDI sobre protección diplomática, el francés Alain Pellet, consideró: “The clean hands doctrine, which was derived directly from the principle of good faith, therefore applied not to the admissibility of international claims but to their merits, exactly as in cases of diplomatic protection”. “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005, p. 101.

¹¹⁷ Para I. Brownlie: “It was often hard to determine on what account States were invoking the doctrine in a particular case. In some cases, it would certainly be part of the merits, if evidence eventually supported the alleged facts. It would then be of significance to discover whether the courts had ever joined the issue of clean hands to the merits, on the grounds that it was not exclusively a preliminary objection. In other cases, the doctrine was invoked by way of prejudice and presented as a form of international public policy. Each case therefore called for contextual analysis and careful characterization”. *Ibidem*, párr. 9, pp. 108 y 109.

¹¹⁸ Se ha insistido en la doctrina en este sentido: “There may be a residue of instances in which questions of inadmissibility and «substantive» issues are difficult to distinguish. This is the case with the so-called «clean hands» doctrine, according to which a claimant’s involvement in activity unlawful under either municipal or international law may bar the claim”. Crawford, James, *Brownlie’s principles of public international law*, cit., p. 675.

¹¹⁹ En el asunto *Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)* se expresaba en términos de que: “Even if it were shown, therefore, that Mexico’s practice as regards the application of Article 36 was not beyond reproach, this would not constitute a ground of objection to the admissibility of Mexico’s claim”. “Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2004, párr. 47. En el caso *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*, consideró “that an applicant may have breached a treaty at issue in the case does not *per se* affect the admissibility of its application”. “Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)”, cit., párr. 142. En igual sentido en *Certain Ira-*

posibilidad, cuando sostuvo que “the Court does not consider that an objection based on the «clean hands» doctrine may by itself render an application based on a valid title of jurisdiction inadmissible”.¹²⁰

Esta misma lógica operó en cuanto a la posibilidad de apreciarse como defensa sobre el fondo del asunto. En *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, en su contramemoria, Estados Unidos buscó desestimar la demanda de Irán sobre la base de alegar un comportamiento ilícito previo —uso de la fuerza ilícito por Irán— que había derivado en las acciones tomadas por Estados Unidos contra las plataformas iraníes en el Golfo Pérsico. Su alegación no se había presentado como una excepción preliminar —ya había una sentencia previa de la CIJ de 12 de diciembre de 1996 sobre esta materia— ni como una cuestión de admisibilidad. De esta forma, al considerar que, con su invocación, Estados Unidos no pretendía impedir a la Corte examinar el fondo de la reclamación iraní, sino tan sólo controvertir las propias actuaciones iraníes para “excluirles de cualquier derecho a la reparación”, la CIJ consideró que una solución de este tipo sólo podía alcanzarse al analizar directamente los reclamos de ambas partes:

The Court notes that in order to make that finding it would have to examine Iranian and United States actions in the Persian Gulf during the relevant period —which it has also to do in order to rule on the Iranian claim and the United States counter-claim.¹²¹

Por su parte, en *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, los hechos alegados por Estados como base de su objeción sobre admisibilidad por la doctrina de “manos limpias” fueron relegados a defenderse al abordar el fondo del asunto. El caso se inició por demanda de Irán contra Estados Unidos por las violaciones del Tratado de Amistad, Relaciones

nian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America) consideró que “even if it were shown that the Applicant’s conduct was not beyond reproach, this would not be sufficient per se to uphold the objection to admissibility raised by the Respondent on the basis of the ‘clean hands’ doctrine”. *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, op. cit., párr. 122.

¹²⁰ “Jadhav (India v. Pakistan)”, Judgment, cit., párr. 61; *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024, párr. 38.

¹²¹ “Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, cit., párrs. 29 y 30.

Económicas y Derechos Consulares en vigor para ambos desde 1957, a consecuencia de actos legislativos y ejecutivos contra activos y entidades iraníes en los marcos de la declaración de Irán por Estados Unidos como “Estado patrocinador del terrorismo”. Las propias razones sostenidas por Estados Unidos para actuar de esta forma contra Irán —apoyo al terrorismo, violaciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto sus programas nucleares y al tráfico de armas, entre otros— fueron los hechos que sirvieron de base para considerar inadmisibile la demanda iraní a partir de la doctrina de las “manos limpias”. A pesar de que Estados Unidos defendió que no era necesario realizar una revisión de los hechos en cuanto al fondo, como en *Oil Platforms*,¹²² la CIJ recondujo la aplicación de esta doctrina a si Irán había violado —o no—, con su conducta, el Tratado de Amistad sobre el cual basaba su demanda, y relegó los hechos presentados por Estados a que pudieran debatirse en la fase de fondo. En tal sentido sostuvo:

Such a conclusion is however without prejudice to the question whether the allegations made by the United States, concerning notably Iran’s alleged sponsoring and support of international terrorism and its presumed actions in respect of nuclear non-proliferation and arms trafficking, could, eventually, provide a defence on the merits.¹²³

Estados Unidos defendió en cuanto al fondo argumentos similares a los sostenidos para buscar la inadmisión de la demanda iraní. Pero después de recordar la *rareza* de su aplicación por los tribunales en los que se había invocado, y la ausencia de reconocimiento por la CIJ como norma de derecho consuetudinario o principio general del derecho, asume que “(a)s a defence on the merits, the Court has always treated the invocation of «unclean hands» with the utmost caution”.¹²⁴ Pero era una “cautela” que, en verdad, reconocía la falta de convicción en tomar partido de una vez sobre su posible aplicación —o no—. Esta indeterminación implicaba no cerrar las puertas a su posible aplicación en esta etapa del procedimiento. Por eso, como ya se ha hecho re-

¹²² *Islamic Republic of Iran v. United States of America*, Preliminary Objections submitted by The United States of America, *cit.*, párr. 634.

¹²³ *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, *op. cit.*, párr. 123.

¹²⁴ *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment of 30 March 2023, párr. 81.

ferencia en otra ocasión, no rehúye valorar en el propio caso si se cumplían algunas condiciones para su aplicación.¹²⁵

Será en *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)* de 2024 cuando la CIJ concluya en la imposibilidad de aplicar esta doctrina como defensa sobre el fondo del asunto para rechazar las reclamaciones. Rusia pidió desestimar la demanda ucraniana relativa a la violación de disposiciones del *Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo* y de la *Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial* porque, en su criterio Ucrania, se presentaba con las “manos sucias”.¹²⁶ Rusia no especificó si la invocación de esta doctrina se presentaba como objeción a la admisibilidad o como defensa sobre el fondo, y la CIJ entendió que, por haberse invocado en la réplica de marzo de 2023, se refería a una defensa sobre el fondo.¹²⁷ En este punto, sostuvo de forma rotunda, aunque sin argumentar su decisión:

[...] the Court considers that the “clean hands” doctrine cannot be applied in an inter-State dispute where the Court’s jurisdiction is established and the application is admissible. Accordingly, the invocation of the “clean hands” doctrine as a defence on the merits by the Russian Federation must be rejected.¹²⁸

La CIJ rechaza así la aplicación de esta doctrina como defensa sobre el fondo cuando se invoca para “desestimar” una reclamación y parece clausurar un capítulo, sin mucha enjundia, tras largos titubeos, escepticismos y luego de un rechazo expreso a tomar partido. Con esta posición, el tribunal blindó su jurisdicción ante cualquier interferencia que pueda obstaculizar el ejercicio de su competencia ante un título válido de jurisdicción debido al posible comportamiento del Estado demandante. En todo caso, la evaluación de la conducta previa del demandante debe constituir un elemento a tomar en

¹²⁵ *Ibidem*, párr. 83 y 84.

¹²⁶ *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024, párr. 34 y 153.

¹²⁷ *Ibidem*, párr. 36.

¹²⁸ *Ibidem*, párr. 38.

cuenta en el análisis del fondo del asunto, con posible incidencia, por ejemplo, en las formas y cuantía de las reparaciones que se ordenen.¹²⁹

Pero, como muestran los últimos casos, resulta difícil entender por qué la CIJ es reticente a reconducir los hechos que sirvieron de base en la invocación de esta doctrina para ser examinados en su posible impacto en la determinación del alcance de las reparaciones. Aun cuando en *LaGrand* la trascendencia de la conducta del demandante, en la determinación de la cuantía y la forma de reparación se restringió a si se incluía una reclamación de indemnización; es criterio defendido que puede tener incidencia en otras formas de reparación.¹³⁰ Sin embargo es una perspectiva ausente, por ejemplo, en *Jadhav (India v. Pakistan)*,¹³¹ *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*,¹³² y *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*. Esto se relaciona con un problema de mayor trascendencia, como se advierte en el último asunto citado, cuando la Corte no consideró necesario ni apropiado ordenar reparaciones pese a declarar la responsabilidad de Rusia por violaciones del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terroris-

¹²⁹ Artículo 39 del *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Criterios que abogaban por que en estos casos el tribunal analizara la conducta de ambos Estados en el ámbito de la responsabilidad internacional, sin que tuviera consecuencias en impedir la admisibilidad de la demanda o reclamación, puede encontrarse en Sr. Sreenivasa Rao: “For example, a State that had engaged in a wrongful act prompting a disproportionate response might be entitled to lodge a complaint. Alternatively, a party adversely affected by wrongful conduct was entitled to complain even it was found that the party had itself contributed to such conduct through its own negligence. In that case, due account should be taken of its share of responsibility, although the latter would not automatically constitute grounds for denying the claim itself”. “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005, p. 108. En este punto también se puede ubicar “Dissenting Opinion of Judge Tarazi, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran”, *cit.*, pp. 64 y 65.

¹³⁰ “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *cit.*, p. 110.

¹³¹ “*Jadhav (India v. Pakistan)*”, Judgment, *cit.*, párr. 149.

¹³² *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment of 30 March 2023, párrs. 224 y ss.

mo y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.¹³³

Esta tardía posición de la CIJ en cerrar filas ante la doctrina de las “manos limpias” es correcta en varios puntos. La privación a un Estado de controvertir una situación de hecho o de derecho, o que pueda un tribunal decidir en sus cuestiones sustantivas, aun cuando haya contribuido a un presunto escenario de ilicitud o pretenda obtener ventaja con su conducta, es defender escenarios de *desjudicialización* en el orden jurídico internacional. Esto tiene el inconveniente agravado de dejar sin efectos jurídicos, cuando sea el caso en cuestión de admisibilidad, la existencia de un fundamento de jurisdicción. En el contencioso interestatal, la operatividad de esta doctrina es tendente a erosionar uno de los avances más significativos del orden jurídico internacional, como es su institucionalización en torno a órganos judiciales o arbitrales para dar viabilidad al principio de solución pacíficas de controversias.

Es evidente que la exposición y defensa de esta doctrina en el contencioso interestatal contiene elementos de regresión institucional, viene lastrada de ciertos componentes de autotutela, incompatible con una tendencia hacia la institucionalización del orden jurídico internacional y de la resolución de sus disputas. Es una institución que marca elementos de desconcentración del orden jurídico, cuando precisamente se trata de evitar las desventajas de un sistema institucional carente de “autoridad” centralizada en la producción y aplicación del derecho.¹³⁴ En esta línea se presenta, no sin cierta razón, la posición de Irán en *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)* ante la alegación por Estados Unidos de que no se presentaba con las “manos limpias”, como ya hemos hecho referencia:

The doctrine of clean hands has nothing to do with the admissibility of an application. And, when, as in this case, “immediate” injury has been caused to a State by the internationally wrongful act of another State, there can be no question of a court or

¹³³ *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024, párrs. 339 y ss.

¹³⁴ Véase, las reflexiones en torno a este tema, dentro de la gran variedad doctrina, a Díaz Barrado, Cástor Miguel, *El derecho internacional del tiempo presente*, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 168 y ss.; Henkin, Louis, “International law: politics, values and functions general course on public international law”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, vol. 216, 1989, p. 21; Crawford, James, *Brownlie’s principles of public international law*, cit., p. 15.

tribunal being prevented from considering the former's claim on the pretext that the claimant State itself has allegedly committed a breach of international law to the detriment of the latter. Accepting such a theory would serve to legitimise the right of all to take the law into their own hands, something which the possibility of judicial settlement is specifically intended to avoid, and would lead to the progressive degradation of international order.¹³⁵

El progreso de derecho internacional en el siglo XX llevó a que el “principio de solución pacíficas de controversias” se elevara a la categoría de “principio estructural” del derecho internacional. Es uno de los factores más destacables de la “estructuración e institucionalización del orden jurídico internacional en la actualidad”, y en particular, la institucionalidad del sistema de arreglo de controversias, aun cuando se produzca en los marcos de una profunda fragmentación de instancias judiciales. Este último aspecto puede ser controvertido para la unidad y coherencia del derecho internacional,¹³⁶ pero sin duda es un fenómeno positivo en los marcos de un orden jurídico internacional que descansa, para dirimir sus controversias ante jurisdicciones internacionales,¹³⁷ en el consentimiento de los Estados.

De este modo, en un orden jurídico internacional, donde el fundamento de jurisdicción internacional sigue abigarrado al consentimiento de los Estados, ¿sería coherente apelar a un principio de equidad que, cuando impugna una eventual resolución de controversias en instancias internacionales, puede contribuir en determinadas circunstancias a la inequidad del orden jurídico

¹³⁵ *Case Concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Observations and Submissions on the U.S. Preliminary Objections submitted by The Islamic Republic of Iran, 1 September 2017, pp. 96 y 97, párr. 8.18.

¹³⁶ Véase, por ejemplo, Charney, Jonathan I., “Is international law threatened by multiple international tribunals?”, *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, vol. 271, 1998, pp. 101-382; Buergenthal, Thomas, “Proliferation of international courts and tribunals: is it good or bad?”, *Leiden Journal of International Law*, vol. 14, núm. 2, 2001, pp. 267-275.

¹³⁷ Aun con el reconocimiento en el derecho internacional vigente de un sistema descentralizado, en que los Estados pueden, por sí solos, buscar reivindicar sus derechos o *hacer que otro Estado cumpla con sus obligaciones* (artículo 49, “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *cit.*), no se descarta la búsqueda de solución pacíficas por vías judiciales en aquellas acciones que el derecho internacional tolera como contramedida. Entre las condiciones para *recurrir* a las contramedidas que diseñó el *Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado*, se encontraba no proceder a ellas, o suspenderlas, en casos en que la disputa estuviera pendiente ante un tribunal internacional. *Ibidem*, artículo 52, 3 b).

y de la sociedad internacional? ¿Por qué evitar, sean cuales fueren los antecedentes de las partes involucradas, que se pueda dirimir el fondo de una controversia por un tribunal, y determinar las responsabilidades internacionales y las formas de reparaciones que correspondan? La CIJ ha dado una respuesta positiva con su rechazo a que esta doctrina pueda impedir judicializar reclamaciones hasta determinar responsabilidades internacionales, pero todavía está lejos de encontrar acomodo a los hechos que dan vida a la invocación de esta doctrina. Y no se trata de otra cosa que desarrollar una jurisprudencia en que se asuma con todas las consecuencias posibles la conducta previa del demandante como un factor a tomar en cuenta en el ámbito de las reparaciones.

V. Conclusiones

La doctrina de las “manos limpias” afronta una enorme desproporción entre su invocación por las partes en litigios internacional y su aplicación por los tribunales. Aunque se intenta presentar como una institución autónoma derivada del principio de equidad y de buena fe, cuando se busca aplicar a los hechos en concreto sus elementos o características no divergen de otras máximas o principios, e incluso suele confundirse con el propio principio de equidad o de buena fe. Esto llama la atención sobre que, para una correcta caracterización u autonomía conceptual, se requiere tener en cuenta un aspecto poco explicitado: tiene fundamento en los mencionados principios de equidad o buena fe, pero debe tener características propias para diferenciarlos de los propios principios y máximas en que toma base.

Estas particularidades han motivado un rechazo mayoritario para afirmarse como institución de derecho internacional. La jurisprudencia internacional es veleidosa, no ha tenido intención de encarar y de poner en perspectivas todas sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, no es posible sostener que no contempla la posibilidad de su aplicación, como ha realizado con otras instituciones. Es un escenario raro, donde resume desconfianza, pero no se le descarta del todo. En el ámbito del arbitraje de inversiones es donde más se ha avanzado en esta discusión, pero no es posible consolidar una jurisprudencia uniforme en temas tales como su encuadre en las fuentes del derecho internacional del artículo 38 del Estatuto de la CIJ, y en específico, su identificación como principio general del derecho.

En la jurisprudencia de la CIJ parece haberse posicionado finalmente un criterio que rechaza su aplicación como causa de admisibilidad o para desestimar una reclamación en el fondo. Representa un gran avance, sin lugar a duda, aunque es una posición que no ha contado con la debida argumentación, algo que va siendo habitual en el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas.¹³⁸ Es una posición que contrasta con su aceptación en arbitrajes de inversiones. Y aunque no se dilucida un escenario uniforme en la jurisprudencia internacional en una perspectiva general, la reciente posición de la CIJ constituye un avance positivo que busca evitar las implicaciones que tiene esta doctrina en la *desjudicialización* de controversias y en la *destructuración* del orden jurídico internacional.

VI. Bibliografía

Alba, Mariano de, “Drawing the line: addressing allegations of unclean hands in investment arbitration”, *Brazilian Journal of International Law*, vol. 12, núm. 1, 2015, pp. 322-338.

“Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate)”, Judgment of May 19th, 1953, *I.C.J. Reports*, 1953.

Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of

¹³⁸ En otros asuntos, la CIJ ha sido parca en argumentar sus posiciones. Por ejemplo, cuando negó la existencia en el derecho internacional general de un principio que dé lugar a una obligación sobre la base de lo que podría considerarse una expectativa legítima (*Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)*, *cit.*, párr. 162); o cuando advierte un derecho internacional consuetudinario en la limitación al derecho de un Estado a extender su plataforma continental dentro de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base de otro Estado (“Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2023, párr. 79). Una regla que, a juicio del juez Tomka, la Corte se *inventó* (“The Judgment is not based on the application of international law but on a rule that the Court simply «invented». The Judgment does not provide any serious analysis of State practice nor the required *opinio juris*. It limits itself to a simple assertion of «customary rule»”. *Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia)*, Dissenting Opinion of Judge Tomka, *I.C.J. Reports*, 2023, párr. 3.

- Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Judgment of 31 January 2024.
- Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, Separate opinion of Judge Iwasawa, Judgment of 31 January 2024.
- “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, Provisional Measures, Separate Opinion of Judge Ajibola, Order of 13 September 1993, *I.C.J. Reports*, 1993.
- “Argentine-Chile Frontier Case”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XVI, 24 November, 1966.
- “Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2004.
- Borchard, Edwin M., *The diplomatic protection of citizens abroad or the law international claims*, New York, The Banks Law Publishing, 1927.
- “Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)”, Jurisdiction and Admissibility, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1988.
- Buergenthal, Thomas, “Proliferation of international courts and tribunals: is it good or bad?”, *Leiden Journal of International Law*, vol. 14, núm. 2, 2001, pp. 267-275.
- Case Concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Observations and Submissions on the U.S. Preliminary Objections submitted by The Islamic Republic of Iran, 1 September 2017.
- Case Concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium)*, Preliminary Objections of the Kingdom of Belgium, 5 July 2000.
- Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, reply and defence to counter-claim submitted by the Islamic Republic of Iran, vol. 1, 10 March 1999.
- Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Counter-Memorial and Counter-Claim, Submitted by the United States of America, 23 June 1997.
- Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (New Application: 1962) (Belgium v. Spain)*, réplique de M. Reuter, oral proceedings, (preliminary objections) (conclusion), 1962.
- Case Concerning Certain Phosphate Lands In. Nauru I (Nauru v. Australia)*, Preliminary Objections of Australia, Written Statement of Nauru, s. f.

- “Cases of the Good Return and the Medea, opinion of the Commissioner, Mr. Hassaurek, of 8 August 1865”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XXIX, United Nations, 1865.
- “Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2019.
- Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment, 30 March 2023.
- Certain German Interests in Polish Upper Silesia*, Merits, Judgment No. 7, P.C.I.J., Series A, No. 7, 1926.
- “Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1992.
- Charney, Jonathan I., “Is international law threatened by multiple international tribunals?”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, vol. 271, 1998, pp. 101-382.
- Cheng, Bin, *General principles of law as applied by international courts and tribunals*, Cambridge, Grotius Publications Limited, 1987.
- Cheng, Bin, *General of principles law as applied by international courts and tribunals*, London Stevens and Sons Limited, 1953.
- Chorzów Factory (Jurisdiction)*, PCIJ Rep Series A no 9, 1927.
- Comisión de Derecho Internacional, *Segundo informe sobre los principios generales del derecho*, Marcelo Vázquez-Bermúdez, Relator Especial, A/CN.4/741, 9 de abril de 2020.
- Crawford, James, “Second report on State responsibility”, *Special Rapporteur*, Document A/CN.4/498 and Add.1-4, 17 March, 1 y de 30 abril, 19 de julio de 1999.
- Crawford, James, *Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados*, Relator Especial, Documento A/CN.4/498 y Add.1 a 4, s. f.
- Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40, Award, 6 December 2016.
- Constantino Caycho, Renato Antonio, “Clean hands and a pure heart?: the application of the clean hands doctrine by the Inter-American Court of Human Rights”, *Estudios de Derecho*, núm. 173, 2022, pp. 12-36.
- Crawford, James y Olleson, Simon, “The exception of non-performance: links between the law of treaties and the law of State responsibility”, *Australian Year Book of International Law*, núm. 21, 2000, pp. 55-74.
- Crawford, James, *Brownlie’s principles of public international law*, 9a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2019.

- Díaz Barrado, Cástor Miguel, “La protección diplomática en el derecho internacional contemporáneo: cuestiones generales”, *Anuario de Derecho de Diplomático y Consular*, núm. 1, 2016, pp. 163-182.
- Díaz Barrado, Cástor Miguel, *El derecho internacional del tiempo presente*, Madrid, Dykinson, 2004.
- Díez de Velasco, Manuel, “La protection diplomatique des sociétés et des actionnaires”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, 1974, vol. 141, pp. 87-185.
- Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname)*, Award of the Arbitral Tribunal, PCA Case No. 2004-04, 17 September, 2007.
- “Dissenting Opinion of Judge Van Den Wyngaert, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2002.
- “Dissenting Opinion of Vice-President Weeramantry, Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium)”, Provisional Measures, Order of 2 June 1999, *I.C.J. Reports*, 1999.
- “Dissenting Opinion of Judge Schwebel, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”, Merits, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1986.
- “Dissenting Opinion of Judge Morozov, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment”, *I.C.J. Reports*, 1980.
- “Dissenting Opinion of Judge Tarazi, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1980.
- “Dissenting Opinion of Judge Read, Interpretation of Peace Treaties (second phase)”, Advisory Opinion, *I.C.J. Reports*, 1950.
- “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, Part Two, 2001.
- Diversion of Water from the Meuse*, PCIJ Series A/B. núm. 70, s. f.
- Diversion of Water from the Meuse*, Individual Opinion by Mr. Hudson, PCIJ Series A/B., No 70, s. f.
- Diversion of Water from the Meuse*, Dissenting Opinion of M. Anzilotti, PCIJ Series A/B., No 70, s. f.
- Dugard, John, “Sixth report on diplomatic protection”, Special Rapporteur, Document A/CN.4/546, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, 2005.

- Dumberry, Patrick, “New developments in the interpretation and application of the clean hands doctrine by investment tribunals”, *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 14, núm. 4, 2023.
- Dumberry, Patrick, “The clean hands doctrine as a general principle of international law”, *Journal of World Investment and Trade*, vol. 21, 2020, pp. 489-527.
- Fitzmaurice, Gerald, “The general principles of international law considered from the standpoint of the rule of law”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye*, vol. 92, 1957, pp. 1-227.
- Fontanelli, Filippo, “The invocation of the exception of non-preformance: a case-study on the role and application of general principles of international law of contractual origin”, *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, vol. 1, núm. 1, 2012, pp. 119-136.
- “Fourth report by Sir Gerald Fitzmaurice, Special Rapporteur”, Document A/CN.4.1120, *Yearbook of The International Law Commission*, Vol. II, 1959.
- Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines*, ICSID Case No. ARB/11/12, Award, December 10, 2014.
- Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex*, PCIJ Series A. No 24, December 6th, 1930.
- “Friedrich and Co. Case”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. X, United Nations, 31 July 1905.
- “Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 1997.
- Gaja, G., “General principles of law”, *Max Planck Encyclopedias of International Law*. <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1410>
- García Arias, L., “La doctrine des «clean hands» en droit international public”, *Annuaire de l’Association des auditeurs et des anciens auditeurs de l’Académie de droit international*, vol. 30, 1960, pp. 14-22.
- Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, PCA Case No. 2016-39, Procedural Order No. 2: Decision on Bifurcation, s. f.
- Gustav FW Hamester GmbH and Co KG v. Republic of Ghana*, ICSID Case No. ARB/07/24, Award, June 18, 2010.
- Henkin, Louis, “International law: politics, values and functions general course on public international law”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, vol. 216, 1989, pp. 9-416.

- Hesham Talaat M. Al-Warraq v. The Republic of Indonesia*, UNCITRAL Case, Award, December 15, 2014.
- Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation*, UNCITRAL, PCA Case No. 2005-03/AA226, 2005.
- “Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2018.
- Inceysa Vallisoletana S.L. v. The Republic of El Salvador*, ICSID Case No. ARB/03/26, Award, 2006.
- “Interpretation of Peace Treaties (second phase)”, Advisory Opinion, *I.C.J. Reports*, 1950.
- Islamic Republic of Iran v. United States of America*, Preliminary Objections submitted by The United States of America, May 1, 2017.
- Jadhav (India v. Pakistan), Judgment, *I.C.J. Reports*, 2019.
- “Jarvis Case, 1903-1905”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. IX, United Nations.
- Jurisdiction of the Courts of Danzig*, Advisory Opinion, PCIJ Series B. No 15, s. f. Kaldunski, Marcin, “Principle of clean hands and protection of human rights in international investment arbitration”, *Polish Review of International and European Law*, vol. 4, núm. 2, 2015, pp. 69-101.
- Kolb, Robert, “La maxime «*nemo ex propria turpitudine commodum capere potest*» (*Nul ne peut profiter de son propre tort*) en droit international public”, *Revue belge de droit international*, núm. 1, 2000, pp. 84-136.
- Kolb, Robert, *Good faith in international law*, Oxford; Portland, Hart Publishing, 2017.
- Laplante, Lisa, “The law of remedies and the clean hands doctrine: exclusionary reparation policies in Peru’s political transition”, *American University International Law Review*, vol. 23, núm. 1, 2009, pp. 51-90.
- Lauterpacht, Hersch, *Recognition in international law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1947.
- “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion”, *I.C.J. Reports*, 2004.
- Liew, Dominic Jr., “Finding clarity amidst confusion: cleaning up the clean hands doctrine in international investment law”, *Singapore Academy of Law Journal*, vol. 32, núm. 2, 2020, pp. 643-683.
- Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v Ukraine*, SCC Case No V 2015/ 092, Final Award, 4 February 2021.

- Llamzon, Aloysius, “Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation the State of the «Unclean Hands» doctrine in international investment law: Yukos as both omega and alpha”, *ICSID Review*, vol. 30, núm. 2, 2015, pp. 315-325.
- “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion”, *I.C.J. Reports*, 2004.
- Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v Ukraine*, SCC Case No V 2015/ 092, Final Award, 4 February 2021.
- “Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)”, Preliminary Objections, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2017.
- Moore, John Bassett, *History and digest of the international arbitrations to which the United States has been party*, vol. III, Washington, Government Printing Office, 1898.
- Moore, John Bassett, *History and digest of the international arbitrations to which the United States has been party*, vol. II, Washington, Government Printing Office, 1898.
- Moussa Aryeh v. The Islamic Republic of Iran*, Award No. 583-266-3, 25 September 1997.
- Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (“Bapex”) and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (“Petrobangla”)*, ICSID Case No. ARB/10/18, Decision on Jurisdiction, 19 August, 2013.
- “Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2018.
- “Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, Judgment, *I.C.J. Reports*, 2003.
- “Opinion Dissidente de M. Anzilotti, Legal Status of Eastern Greenland”, PCIJ Series A/B., No 53, Judgment, 5 April 1933.
- Petit-De-Gabriel, Eulalia-W., “«Clean Hands Revisited». El eterno retorno de una doctrina discutible”, *Anuario español de derecho internacional*, vol. 39, 2023, pp. 341-405.
- Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria*, ICSID Case No. ARB/03/24, Award, August 27, 2008.
- Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic*, ICSID Case No. ARB/06/5, Award, April 15, 2009.

Pomson, Ori, "The clean hands doctrine in the Yukos Awards: a response to Patrick", *Journal of World Investment and Trade*, vol. 18, núm. 4, 2017, pp. 712-734.

Public sitting held on Wednesday 21 April 2004, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Shi presiding, in the case concerning the Legality of Use of Force, Verbatim Record, 2024.

Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 4.30 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of America) Request for the indication of provisional measures, Verbatim Record, 1999.

Public Sitting held on Monday 10 May 1999, at 4.15 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Canada) Request for the indication of provisional measures, Verbatim Record, 1999.

Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 11.55 am, at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Netherlands) Request for the indication of provisional measures, Verbatim Record, 1999.

Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 3 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United Kingdom) Request for the indication of provisional measures, Verbatim Record, 1999.

Public Sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 12.20 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Portugal) Request for the indication of provisional measures, Verbatim Record, 1999.

Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), Dissenting Opinion of Judge Tomka, *I.C.J. Reports*, 2023.

Remiro Brotons, R., *et al.*, *Derecho internacional. Curso general*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.

Rolin, Plaidoirie de M., *Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium v. Spain)*, Volume II Oral Proceedings (Preliminary Objections), 1962.

Rouhollah Karubian v. The Government of the Islamic Republic of Iran, Award No. 569-419-2, 6 March 1996.

- Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5, Award, 22 August 2016.
- Salmon, Jean, “Des mains propres comme conditions de recevabilité des réclamations internationales”, *Annuaire français du droit international*, vol. 10, 1964, pp. 225-266.
- Shapovalov, Aleksandr, “Should a requirement of clean hands be a prerequisite to the exercise of diplomatic protection - human rights implications of the international law commission’s debate”, *American University International Law Review*, vol. 20, núm. 4, 2005, pp. 829-866.
- Shelton, Dinah, *Remedies in international human rights law*, 3a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2015.
- “Summary records of the meetings of the fifty-seventh session of the Commission”, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. I, 2 May-3 June and 11 July-5, 2005.
- “Separate Opinion by Sir Arnold McNair, International status of South-West Africa, Advisory Opinion”, *I.C.J. Reports*, 1950.
- South American Silver Limited v. The Plurinational State of Bolivia*, PCA Case No. 2013-15, Award, November 22, 2018.
- TEDH, Sala: *Margari c. Greece*, núm. 36705/16, *Dissenting Opinion of Judge Serghides*, 2023.
- TEDH, Sala: *Khachatryan And Konovalova c. Russia*, núm. 28895/14, *Partly Dissenting Opinion of Judge Serghides*, 2021.
- TEDH, Gran Sala: *N.D. and N.T. v. Spain*, núms. 8675/15 y 8697/15, 2020.
- TEDH, Gran Sala: *Güzelyurtlu and Others c. Cyprus and Turkey*, núm. 36925/07, *Partly Dissenting Opinion of Judge Serghides*, 2017.
- TEDH, Gran Sala: *Hirsi Jamaa and Others v. Italy*, núm. 27765/09, 2012.
- TEDH, Sala: *Witek c. Poland*, núm. 13453/07, 2010.
- TEDH, Sala: *Ukraine-Tyumen c. Ukraine*, núm. 22603/02, 2007.
- TEDH Sala: *Čonka c. Belgium*, núm. 51564/99, 2002.
- TEDH, Gran Sala: *Chapman c. The United Kingdom*, *Separate Opinion of Judge Bonello*, núm. 27238/95, 2001.
- TEDH, Gran Sala: *K.-H.W. c. Germany*, núm. 37201/97, *Partly Dissenting Opinion of Judge Pellonpää, Joined By Judge Zupančič*, 2001.
- TEDH, Sala: *Van Der Tang c. Spain*, núm. 19382/92, *Separate Opinion of Judge Morenilla*, 1995.
- The Mavrommatis Palestine Concessions*, P.C. I.J., Series A, No. 5, s. f.

The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on the Prosecution's motion for reconsideration of the decision excusing Mr Kenyatta from continuous presence at trial, ICC-01/09-02/11-863, Dissenting Opinion of Judge Eboe-Osuji, 26 November 2013.

“Timor Sea Conciliation (Timor-Leste/Australia)”, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XXXIV, United Nations, 19 September 2016.

Tippetts, Abbott, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Case No. 7, (Award No. 141-7-2), 29 juin 1984.

Visscher, Paul De, “Cours général de droit international public”, *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, vol. 136, 1972, pp. 1-202.

World Duty Free Company Limited v. The Republic of Kenya, ICSID Case No. ARB/00/7, Award, October 4, 2006.

Wortley, B. A., “The general principles of private international law from the English standpoint”, *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, vol. 71, 1947, pp.1-109.

Xiouri, Maria, “The exceptio non adimpleti contractus in public international law”, *International Community Law Review*, vol. 21, núm. 1, 2019, pp. 56-92.

Cómo citar

IJJ-UNAM

Bertot Triana, Harold, “La doctrina de las “manos limpias” (clean hands): entre consagraciones fallidas y escenarios de desjudicialización en el orden jurídico internacional”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, México, vol. 25, núm. 25, 2025, e19401. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2025.25.19401>

APA

Bertot Triana, H. (2025). La doctrina de las “manos limpias” (clean hands): entre consagraciones fallidas y escenarios de desjudicialización en el orden jurídico internacional. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 25(25), e19401. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2025.25.19401>